



Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRÍA EN DERECHO



DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y SU REPERCUSIÓN EN LOS
ACUERDOS REPARATORIOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUNO, 2013

TESIS

PRESENTADA POR:

Carlos Abraham Cáceres Tapia

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN
DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL PENAL

Juliaca – Perú

2015



Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" - Juliaca
ESCUELA DE POST GRADO
MAESTRÍA EN DERECHO

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y SU REPERCUSIÓN EN LOS
ACUERDOS REPARATORIOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUNO, 2013

TESIS PRESENTADA POR:
Carlos Abraham Cáceres Tapia

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN DERECHO
CON MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL PENAL

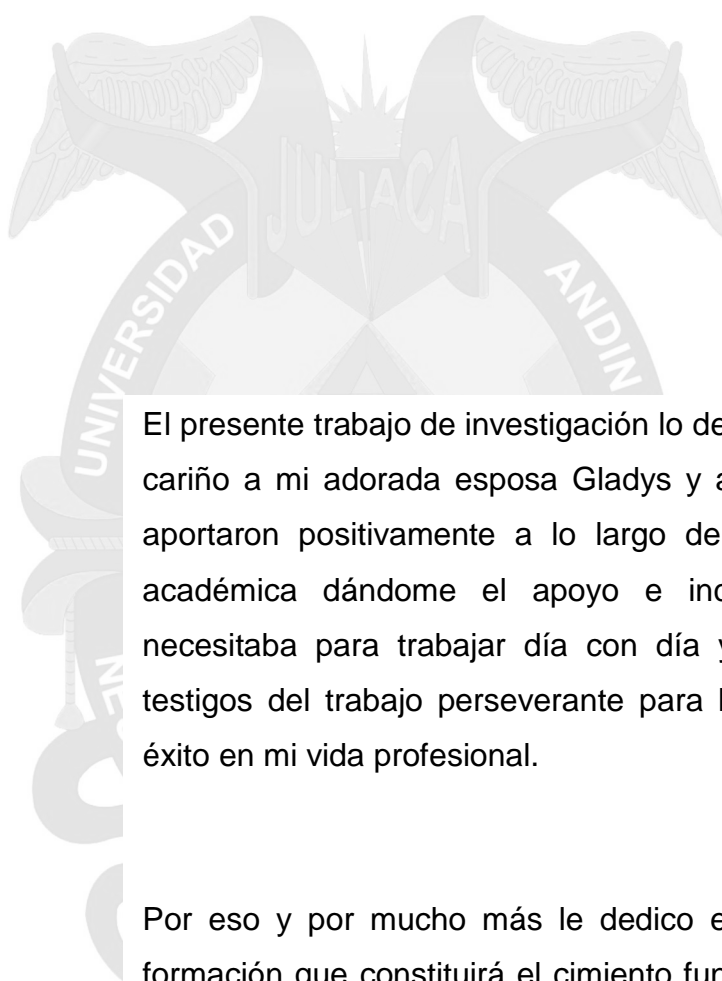
APROBADA POR:

PRESIDENTE DEL JURADO : _____
MSc. Edson Jauregui Mercado

PRIMER MIEMBRO : _____
MSc. Julio Cesar Chucuya Zaga

SEGUNDO MIEMBRO : _____
Dr. Fredy Chalco Vargas

ASESOR DE TESIS : _____
Dr. Boris Gilmar Espezúa Salmón



El presente trabajo de investigación lo dedico con mucho cariño a mi adorada esposa Gladys y a todos quienes aportaron positivamente a lo largo de mi formación académica dándome el apoyo e incentivación que necesitaba para trabajar día con día ya que son los testigos del trabajo perseverante para lograr un nuevo éxito en mi vida profesional.

Por eso y por mucho más le dedico este proceso de formación que constituirá el cimiento fundamental en mi vida profesional y a través del cual forjare un nuevo presente en las labores que desempeñemos todos los días.

Con amor.

Carlos.



La gratitud es el sentimiento noble del alma generosa que engrandece el espíritu de quienes lo comparten, el agradecimiento profundo al creador de todo lo existente, por el amor incondicional que me concede en cada segundo de vida.

A la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez", por abrir este espacio de formación académica de tanta importancia, a mí esposa Gladys por el apoyo diario e incentivar al trabajo permanente.

Con gran espíritu de reconocimiento.

Carlos.



ÍNDICE

Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento	iv
Resumen.....	xi
Abstract.....	xii
Introducción.....	1

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Exposición de la situación problemática.....	4
1.2. Formulación del planteamiento del problema.....	6
1.2.1. Problema general	6
1.2.2. Problemas específicos	6
1.3. Justificación de la investigación	6
1.4. Objetivos	9
1.4.1. Objetivo general	9
1.4.2. Objetivos específicos.....	9

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación.....	11
2.2. Sustento Teórico	12
2.2.1. Delitos contra el patrimonio	12
2.2.2. Categorías contra el patrimonio	14
2.2.3. La acción penal	17
2.2.4. El derecho penal como rama autónoma del derecho público.....	18
2.2.5. La legislación penal como medio de limitar el poder represivo del estado	



el principio de legalidad	19
2.2.6. El fundamento de la pena.....	20
2.2.7. ¿Qué retribuye la pena?.....	23
2.2.8. Las críticas a la prisión como medio razonable de retribución	24
2.2.9. La necesidad de privatizar la acción penal.....	24
2.2.10 La privatización de la acción aumentaría el efecto preventivo general del derecho	27
2.2.11 La victimología en la actualidad	29
2.2.12 La desvictimación y la reparación	30
2.2.13 Prevención en el sistema penal.....	32
2.2.14 Derechos de las víctimas en el nuevo proceso penal	33
2.2.15 La víctima y el consentimiento en el conflicto penal	37
2.2.16 La justicia reparadora y su articulación con el sistema penal.....	40
2.2.17 Postulados de la justicia restaurativa	43
2.2.18 Reparación antes que la sentencia	44
2.2.19 Sobre el contenido de la reparación civil	46
2.2.20 Acuerdos reparatorios	47
2.3. Marco conceptual	48
2.4. Hipótesis.....	57
2.4.1. Hipótesis de trabajo.....	57
2.4.2. Subhipótesis.....	57
2.5. Operacionalización de variables.....	58

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Nivel y tipo de investigación	59
--	----



3.2.	Diseño de la investigación	60
3.3.	Población y muestra	61
3.3.1.	Población.....	61
3.3.2.	Muestra	61
3.4.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	62
3.4.1.	Técnicas	62
3.4.2.	Instrumentos.....	63
3.4.3.	Técnicas de procesamiento de datos	63
3.5.	Diseño de contrastación de la hipótesis	63

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1.	Generalidades	65
4.2.	Reporte de los delitos contra el patrimonio	66
4.3.	Resultado de la variables delitos contra el patrimonio	66
4.4.	Resultado de la variables delitos contra el patrimonio según dimensiones	69
4.5.	Resultado de las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil	81
4.6.	Resultado de las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil por dimensiones	83
4.7.	Relación de los delitos contra el patrimonio y las características de los acuerdos.....	87
4.8.	Discusión.....	94
	Conclusiones.....	95
	Sugerencias	97



Referencias bibliográficas 98

Anexos 101





ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° 1: Delitos contra el patrimonio en las víctimas del distrito judicial de Puno.....	67
TABLA N° 2: Hurto en las víctimas del distrito judicial de Puno	69
TABLA N° 3: Robo en las víctimas del distrito judicial de Puno	71
TABLA N° 4: Abigeato en las víctimas del distrito judicial de Puno.....	73
TABLA N° 5: Apropiación ilícita en las víctimas del distrito judicial de Puno....	74
TABLA N° 6: Receptación ilícita en las víctimas del distrito judicial de Puno...	76
TABLA N° 7: Estafa en las víctimas del distrito judicial de Puno	77
TABLA N° 8: Extorsión en las víctimas del distrito judicial de Puno.....	79
TABLA N° 9: Daño en las víctimas del distrito judicial de Puno	80
TABLA N° 10: Procedimientos reparatorios y principio de oportunidad resueltos en el distrito judicial de Puno.....	82
TABLA N° 11: Acuerdos reparatorios en el distrito judicial de Puno	83
TABLA N° 12: Principio de oportunidad en el distrito judicial de Puno.....	85
TABLA N° 13: Tabla de contingencia de correlación de variables	88
TABLA N° 14: Estadístico de prueba chi cuadrado.....	88



ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO N° 1: Delitos contra el patrimonio en las víctimas del distrito judicial de Puno.....	67
GRÁFICO N° 2: Hurto en las víctimas del distrito judicial de Puno	70
GRÁFICO N° 3: Robo en las víctimas del distrito judicial de Puno	71
GRÁFICO N° 4: Abigeato en las víctimas del distrito judicial de Puno.....	73
GRÁFICO N° 5: Apropiación ilícita en las víctimas del distrito judicial de Puno	74
GRÁFICO N° 6: Receptación ilícita en las víctimas del distrito judicial de Puno	76
GRÁFICO N° 7: Estafa en las víctimas del distrito judicial de Puno.....	77
GRÁFICO N° 8: Extorsión en las víctimas del distrito judicial de Puno.....	79
GRÁFICO N° 9: Daño en las víctimas del distrito judicial de Puno	80
GRÁFICO N° 10: Procedimientos reparatorios y principio de oportunidad resueltos en el distrito judicial de Puno	82
GRÁFICO N° 11: Acuerdos reparatorios en el distrito judicial de Puno	83
GRÁFICO N° 12: Principio de oportunidad en el distrito judicial de Puno.....	85
GRÁFICO N° 13: Gráfico de contingencia de correlación de variables.....	88
GRÁFICO N° 14: Estadístico de prueba chi cuadrado.....	88

RESUMEN

El propósito del presente estudio es determinar los delitos contra el patrimonio repercute en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013, con el fin de responder a las necesidades y expectativas del quehacer jurídico.

La población está constituida por 42 expedientes. El tipo de investigación es no experimental, siendo el diseño descriptivo – correlacional, el método de investigación que se aplicó es la descriptiva y el nivel de investigación es el cuantitativo. Se comprobó la verdad de la hipótesis con el estadístico denominado Chi Cuadrado.

En los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013, es así que la relación de las variables logrado según el estadístico de prueba de la Chi Cuadrado Calculado es de 2,544 que es inferior al valor crítico de la Chi Calculado tabular en 3.84 asumiendo el nivel de confianza de 0,05, con 1 grado de libertad. Es así que los delitos contra el patrimonio son altamente independientes a la variable de las medidas preventivas de las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil.

Palabras Claves: delitos, patrimonio, acuerdos, reparación civil, víctimas.



ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the offenses against property affects the characteristics of the arrangements for the payment of civil damages, the victims of the judicial district of Puno, 2013, to meet the needs and expectations of the work legal.

The population consists of 42 records. The research is not experimental, being descriptive design - correlational research method applied is descriptive and level of research is quantitative. The truth of the hypothesis with the statistical called Chi Square was found.

In crimes against property, prosecutors do not establish preventive measures in the characteristics of the arrangements for the payment of civil damages, the victims of the judicial district of Puno, 2013, so that the relationship of the variables managed according to statistical test Chi Square is 2,544 Calculated which is below the critical value of the Chi tabular Calculated at 3.84 assuming the confidence level of 0.05 with 1 degree of freedom. So that crimes against property are largely independent of the variable of preventive measures of the characteristics of the arrangements for the payment of civil damages.

Keywords: crime, property, agreements, civil damages, victims.

INTRODUCCIÓN

Los Acuerdos reparatorios tiene un fin de reducir la carga procesal, así como de reparar el daño de las víctimas. Sin embargo, estos acuerdos no se están cumpliendo conforme a las disposiciones dictadas en las Fiscalías Penales de la ciudad de Puno. Los operadores de justicia no tienen todos los elementos para poder hacer cumplir los acuerdos reparatorios, por consiguiente es necesario tomar medidas a fin de lograr un fin efectivo en bien de las víctimas.

El empleo de las Salidas Alternativas, no contribuyen de ninguna manera a la impunidad, sino que esta es parte de un conjunto de mecanismos, que no necesariamente han de concluir en una sentencia privativa de libertad, pero efectivamente hade existir una reparación del daño emergente del delito, con la interposición de ciertas reglas que al incumplirlas, dan la posibilidad de que puedan ser revocada el tipo de salida interpuesta.

El presente estudio se estructura en siete capítulos de la siguiente forma:

Capítulo I: El Problema; se considera la exposición de la situación problemática, que directamente recae en la formulación del planteamiento del problema; la justificación de la investigación o los motivos que dieron paso a la investigación.

Capítulo II: Objetivos; son los que guían el propósito del estudio, estructurado en objetivo general y objetivos específicos, que es la finalidad que se quiere lograr con el estudio realizado.



Capítulo III: Marco Referencial; se estructura en los antecedentes de la investigación referidos a las variables de estudio; marco teórico que sustenta el proyecto de investigación los que son los conceptos teóricos de los diferentes autores comprendidos sobre delitos contra el patrimonio y las características de los acuerdos reparatorios, que se menciona los diferentes indicadores de las dos variables; finalmente el marco conceptual, tiene como propósito fundamentar las variables de estudio y dedicado a ubicar el problema de investigación dentro de un aspecto de la realidad.

Capítulo IV: Hipótesis; considerando la hipótesis de investigación a probar, en él se establece una relación entre las variables de estudio antes de conocer los datos empíricos, basada en el conocimiento previo; las variables de estudio que permite el desarrollo coherente de la misma investigación, con sus correspondientes dimensiones, sea conceptual u operacional.

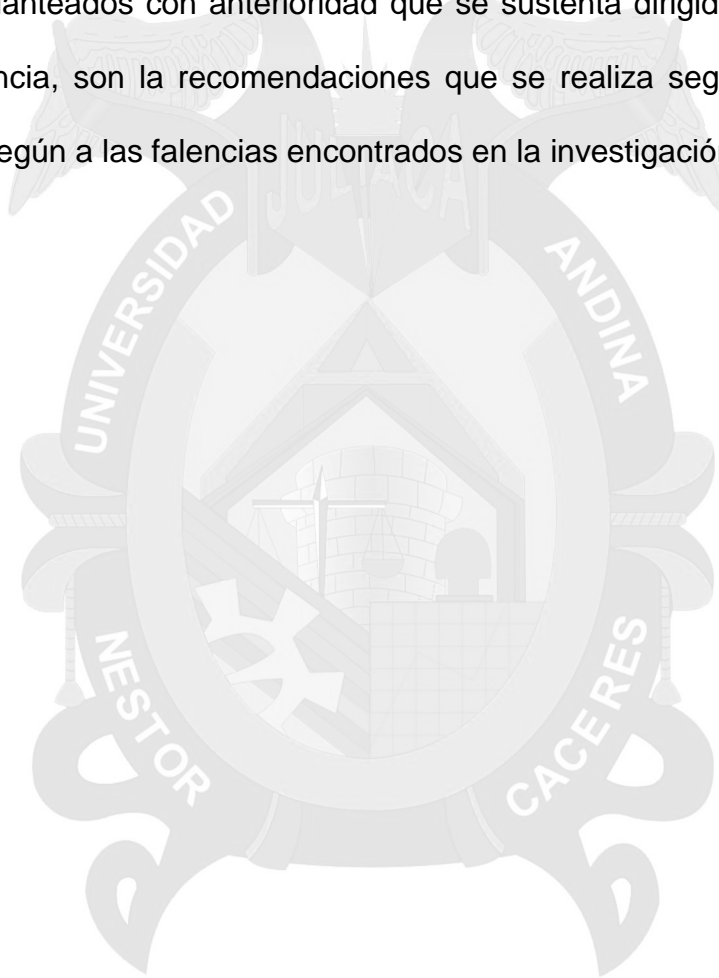
Capítulo V: Procedimiento metodológico; en la parte metodológica se considera; el tipo de investigación que es no experimental y de diseño descriptivo correlacional, el método de investigación es el cuantitativo; con la elección de la población y muestra respectiva. Se plantea también la técnica y los instrumentos seleccionados de acuerdo a la naturaleza del trabajo y por último el diseño de contrastación de hipótesis.

Capítulo VI: Resultado; consiste en presentar los reporte de las variables en estudio, para representarlo en cuadros que contiene las dimensiones, haciendo hincapié minuciosa de la descripción de resultados, representación de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos en el que se realiza la interpretación de los resultados obtenidos, la relación de las dos variables



motivo de estudio, prueba de hipótesis, discusión de resultados en el que los autores expresan sus opiniones de los resultados alcanzados, dando validez en función de la metodología utilizada.

Capítulo VII: Conclusiones y sugerencias; en el primero, son los resultados logrados según el propósito de la investigación considerando los objetivos planteados con anterioridad que se sustenta dirigido a los lectores y las sugerencia, son la recomendaciones que se realiza según los resultados logrados, según a las falencias encontrados en la investigación realizada.



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Exposición de la situación problemática

En consecuencia el Nuevo Código Procesal Penal de modelo acusatorio, de tendencia adversarial y garantista de derechos humanos, prevé diversos instrumentos procesales, para obtener una solución rápida y efectiva del conflicto judicial penal, derivado de un hecho punible; uno de estos mecanismos son las denominadas Salidas Alternativas, compuestas por: El Principio de Oportunidad, Los Acuerdos Reparatorios, El Proceso de Terminación Anticipada y El proceso Inmediato; las mismas que requieren de una investigación esclarecedora, para su correcta aplicación en nuestro distrito judicial de Puno, y por qué no decir su correcta aplicación en el país; así mismo resulta necesario descubrir cómo se vienen aplicado por parte de los fiscales y por parte de los abogados; y de esta forma apreciar los criterios que se manejan en la negociación.

El Legislador y la Sociedad Civil, han tenido que enfrentar el conflicto desde su aparición, en especial cuando afecta bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal, en ese sentido la criminalidad varía, pues hay variedades:



una criminalidad alta, mediana y pequeña, estos dos últimos por su incidencia muy frecuente en cantidad tienen un significado muy especial en la eficacia de la Tutela Judicial que brinda el Estado y en especial la eficacia de la Administración de Justicia.

Esto ha obligado a optar por razones de política criminal, a crear instrumentos de salidas alternas al proceso penal; especialmente son los criterios de Oportunidad y la posibilidad del Archivo en las causas penales fundadas por razones de oportunidad mediante el cumplimiento de acuerdo entre los sujetos comprometidos en el conflicto penal, por consiguiente lo que se pretende es regresar el conflicto a sus dueños, las partes interesadas, que bajo la negociación hacen que el delito pueda culminar no en su estado natural como es el proceso, sino a través de un acuerdo consensuado entre victimario y víctima.

De ahí que en el presente trabajo es un estudio sobre delitos contra el patrimonio y su repercusión en los acuerdos reparatorios de las víctimas; mediante el cual se busca resarcir el daño causado por los autores del delito hacia las víctimas de hurto, robo, abigeato, apropiación ilícita, receptación, estafa y otras defraudaciones, fraude en la administración de personas jurídicas, extorsión, usurpación, daños y delitos informáticos.

Estos delitos se generan por factores de índole económico social y tienen gran incidencia en nuestra sociedad, cometiéndolos individuos de los diferentes estratos sociales en sus diversas tipologías, algunas veces individualmente y otras conformando grupos organizados, constituyen el mayor número de las infracciones en agravio respecto de los bienes muebles y en

menor porcentaje en lo relacionado con los bienes inmuebles (usurpación y daños).

1.2. Formulación del planteamiento del problema

1.2.1. Problema general:

¿En qué medida los delitos contra el patrimonio repercute en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013?

1.2.2. Problemas específicos:

- a) ¿Cuáles son los delitos contra el patrimonio en las víctimas del distrito judicial de Puno?
- b) ¿Cuál las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil en las víctimas del distrito judicial de Puno?
- c) ¿Cuál es la relación que existe entre los delitos contra el patrimonio y las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno?

1.3. Justificación de la investigación

La presente investigación planteada será de utilidad por el siguiente:

Hoy en día parte de la doctrina se apunta en señalar, que en la actualidad, se requiere más de un derecho penal reparador que de un derecho



penal sancionador, así como una justicia restaurativa frente a la justicia retributiva.

Efectivamente las Salidas Alternativas son mecanismos de descarga del sistema penal; modos de solucionar conflictos y satisfacer los intereses concretos de la víctima, evitando así llegar a la última etapa del proceso "el juicio oral", por lo que es ahí en donde radica su importancia y su necesaria aplicación.

Hay que tener en cuenta que el empleo de las Salidas Alternativas, no contribuyen de ninguna manera a la impunidad, sino que esta es parte de un conjunto de mecanismos, que no necesariamente han de concluir en una sentencia privativa de libertad, pero efectivamente debe existir una reparación del daño emergente del delito, con la interposición de ciertas reglas que al incumplirlas, dan la posibilidad de que puedan ser revocada el tipo de salida interpuesta.

El tema que se pretende investigar es de mucha relevancia jurídica, social, en el distrito judicial de Puno, incluso a nivel nacional; porque va a permitir determinar, en realidad cuáles son esas causas que restringen y no permiten una cabal aplicación de los acuerdos reparatorios, cuando se sanciona en los delitos contra el patrimonio, caso específico sobre el hurto simple, robo, abigeato, apropiación ilícita, receptación, estafa y otras defraudaciones, fraude en la administración de personas jurídicas, extorsión, usurpación, daños y delitos informáticos, en las diferentes víctimas.



El estudio respecto a los acuerdos reparatorios de las víctimas del delito contra el patrimonio, permitirá establecer si con el NCPP se hace justicia y que las etapas del proceso penal están bien establecidas para estos casos y que los justiciables reduzcan el proceso penal, minimizándolo en una etapa como es la de investigación y el principio de oportunidad.

Así mismo los Acuerdos Reparatorios, forma parte de una institución mayor como son los criterios de oportunidad, son escasamente conocidos, no existe un estudio serio ni una investigación esclarecedora en nuestro medio jurídico del Distrito Judicial de Puno y porque no decir, en el país; tanto es necesario descubrir como se viene aplicando, máxime como Fiscales de Decisión Temprana nos corresponde el conocimiento piloto y directo de ésta institución y como viene funcionado en la realidad y apreciar los criterios de oportunidad que se manejan en la negociación y para lograr una justicia restaurativa, así como la eliminación de los conflictos de mediana y pequeña criminalidad, logrando una salida rápida.

Nos interesa conocer cuál es la frecuencia o nivel de incidencia de las acciones de cumplimiento del acuerdo reparatorio para las víctimas, de los delitos contra el patrimonio, casos de hurto, robo, abigeato, apropiación ilícita, receptación, estafa y otras defraudaciones, fraude en la administración de personas jurídicas, extorsión, usurpación, daños y delitos informáticos. Los acuerdos Reparatorios considerada como una institución de criterios de oportunidad, constituye una puerta inmediata anterior, para intentar abrir la siguiente puerta, donde se puede permitir que los conflictos penales, concluyan

con el manejo de la acción penal por parte de los particulares y por consiguiente la privatización en gran parte del Derecho Penal.

Finalmente el presente estudio se justifica por su magnitud, dado que el sistema de enjuiciamiento es regulado en el Código Procesal penal; además se justifica doblemente la Investigación, en la intención que los resultados y conclusiones a que se arribe, sobre ésta institución tenga un efecto reflejado y sirva en orientar a todos los distritos judiciales donde se viene implementando y donde se implementará, con la finalidad de lograr una aplicación uniforme, contundente y adecuada en la solución del conflicto penal.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar los delitos contra el patrimonio repercute en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- a. Determinar los delitos contra el patrimonio en las víctimas del distrito judicial de Puno.
- b. Establecer las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil en las víctimas del distrito judicial de Puno.



- c. Determinar la relación que existe entre los delitos contra el patrimonio y las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación

Naveira (2005) El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual, en la que se ha concluido que: se pretende aportar un estudio unitario y completo acerca de los principios básicos o fundamentales que rigen la materia relativa a la reparación de los daños y perjuicios derivados de esa responsabilidad civil, si bien, teniendo en cuenta la relación de interdependencia que existe entre el resarcimiento y el daño, se hace preciso tomar como punto de partida para acometer el análisis del resarcimiento la previa individualización del concepto de daño resarcible.

Escobar (2007), Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el derecho internacional penal en la que concluye que: el objeto de investigación de la tesis doctoral es el estatuto jurídico de las víctimas en el Derecho internacional penal. Este sector del Derecho internacional tiene como función la criminalización, a nivel sustantivo y procesal, de las más graves violaciones de los derechos humanos y de las normas de Derecho internacional humanitario.

2.2. SUSTENTO TEÓRICO

2.2.1. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

A) PATRIMONIO, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

El Título V del Libro II del Código Penal se refiere a los delitos contra el patrimonio. En otros códigos penales, estos delitos se agrupan en un mismo capítulo bajo la rúbrica de "Delitos contra la propiedad". Nuestro legislador, en el código penal actual, manteniendo la misma rúbrica de 1924, ha sido consciente de todas las dificultades que conlleva el empleo del término "Propiedad", en la medida en que tal concepto no abarca todos los comportamientos típicos acogidos bajo el Título V, de ahí que en la actualidad, tanto en el ámbito penal como en el civil, se utilice en cuanto termino más apropiado el de "patrimonio".

No obstante, el concepto de patrimonio tampoco presenta un contenido claro capaz de resolver todos los problemas que plantean estos delitos. Fundamentalmente, son cuatro las tesis planteadas en torno al concepto de "patrimonio":

1. Concepción jurídica del patrimonio: Según esta teoría, solo son derechos patrimoniales aquellos reconocidos como derechos patrimoniales subjetivos por el Derecho privado o público. En la actualidad, esta posición ha caído en desuso.
2. Concepción económica estricta del patrimonio: El patrimonio está constituido por la suma de valores económicos pertenecientes a una persona, sin importar que estos gocen de reconocimiento jurídico. No obstante, esta posición por su visión puramente objetiva, no da importancia a las circunstancias de cada caso

individual - importancia personal del bien, y por ser tan amplia, la concepción de patrimonio abarcaría incluso aquellos bienes poseídos antijurídicamente.

3. Concepción patrimonial personal: Según esta tesis, el concepto de patrimonio depende de la opinión del sujeto pasivo de la infracción. En esta posición se concede una sobrevaloración al momento subjetivo de la infracción, lo cual puede llevar a soluciones injustas, puesto que no existe ningún parámetro objetivo de valoración.

4. Concepción mixta o jurídico-económica del patrimonio: Es esta la posición que actualmente asume la doctrina con carácter mayoritario. Desde esta concepción, el patrimonio está constituido por la suma de los valores económicos puesto a disposición de una persona, bajo la protección del ordenamiento jurídico.

B) CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS PATRIMONIALES

Según la doctrina, los delitos patrimoniales pueden clasificarse en función de dos criterios:

1. Según se obtenga un determinado enriquecimiento, se distinguen en:
 - a. Delitos de enriquecimiento: Son aquellos en que el sujeto activo busca una determinada ventaja patrimonial –hurto, estafa, apropiación ilícita-, pudiendo llevar a cabo la obtención de tal ventaja a través de diferentes modalidades que, fundamentalmente, son de apoderamiento (hurto, robo) o de defraudación (donde se pone el acento en una determinada relación entre sujeto activo y pasivo) Lo distintivo es el ánimo de lucro indefinido con el enriquecimiento.

- b. Delitos sin enriquecimiento: Son aquellos en el que el sujeto activo solo persigue un perjuicio del sujeto pasivo (daños).
- 2. Según el objeto material sobre el que recae el comportamiento típico, pueden clasificarse en:
 - a. Delitos que recaen solo sobre bienes muebles: hurto, robo, apropiación ilícita, receptación.
 - b. Delitos que recaen solo sobre bienes inmuebles: usurpación.
 - c. Delitos que recaen sobre bienes muebles e inmuebles: estafa, extorsión, daños.

2.2.2. CATEGORÍAS CONTRA EL PATRIMONIO

Engaño.- El núcleo del tipo penal de estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del delito se hace entregar un bien patrimonial, por medio del engaño; es decir, haciendo creer la existencia de algo que en realidad no existe.

El bien judicial protegido es el patrimonio o propiedad. Modernamente se considera que el término más apropiado es el de patrimonio, que consiste en una universalidad de derecho (*universitas iuris*), que se constituye por activos y pasivos. En términos generales, cuando como consecuencia de un engaño se produce la disminución del patrimonio por la aparición súbita de un pasivo en desmedro del activo, se ha lesionado el bien jurídico por medio de una estafa.

Existen diferentes modalidades, ya que se entiende que el engaño se puede producir tanto de un modo activo (lo más frecuente) como de un modo pasivo. El problema principal para entender que un engaño de un modo pasivo es calificativo de estafa, es que el engaño debe ser bastante como para



producir un acto de disposición. Una actuación pasiva (no informar, o no contar algo) es difícil que provoque un engaño de tal magnitud.

En el derecho español se diferencia entre las estafas constitutivas de delito y las que constituyen falta, estando la nota diferencial en el valor de lo estafado. Para entender todo esto, hace falta un entendimiento de la diferencia entre delito y falta, que se encuentra en el hecho que:

Las faltas sólo se castigan cuando son consumadas, esto es se ha realizado el resultado lesivo, ahora bien esta regla no es absoluta, puesto que las faltas contras las personas y contra el patrimonio se castigan, también, cuando son intentadas. Las faltas son juzgadas por el juez de instrucción y los delitos por el juez de lo penal. La reincidencia sólo cuenta en los delitos, no las faltas. Como regla la diferencia básica está en la gravedad de la conducta: más grave delito menos grave falta. (Caro John, J. A. 2007)

Robo.- El que se apodera legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse del él, sustrayendo en el lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de tres ni mayor de ocho años. (Código Penal, Art, 188, 2008; 170)

Hurto.- El que sustrae también el bien mueble ajeno con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año, (Código Penal, Art, 187, 2008; 166)

Abigeato. (Hurto de ganado).- El que, para obtener provechos, se apodera ilegítimamente de ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido, total o parcialmente ajeno, aunque se trate de un solo animal, sustrayéndolo



del lugar donde se encuentra será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. (Código Penal, Art, 189-A, 2008; 170)

Abigeato. (Robo de ganado).- El que se apodera ilegalmente de ganados vacuno, ovinos, equino, caprino, porcino o auquénido, total o parcialmente ajeno, aunque se trate de un solo animal, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra las personas o amenazándolas con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. (Código Penal, Art, 189-C, 2008, 170)

Apropiación ilícita común.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregas, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de dos ni mayor de cuatro años. (Código Penal, Art, 190, 2008, 170)

Receptación.- El que adquiere, recibe donación en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa días – multa. (Código Penal, Art, 194, 2008; 170)

Estafa.- El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado, mediante engaño, astucia, ardid, u otra forma fraudulenta, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años. (Código Penal, Art, 196, 2008, 180)



Extorsión.- El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. (Código Penal, Art, 200, 2008, 186)

Daño simple.- El que daña destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días – multa.

2.2.3. LA ACCIÓN PENAL

El origen del Derecho penal como modo de canalizar la venganza privada.

La mayoría de los autores del siglo XIX han concluido en que el origen del Derecho Penal fue la venganza de sangre ejercida sin límites ni medida por una familia contra otra. (Hendler, 1991, p.101); El rudimentario Derecho Penal en la era prehistórica, era ejercida como respuesta automática frente a la violación de los tabúes, basado en un carácter religioso o expiatorio, de naturaleza social, objetivo y, por ende, extensivo al grupo familiar; una vez alcanzado un grado de madurez psicológico y lógica, el hombre comenzó a justificar el castigo en la venganza. Que tenía cierto grado de proporción y concordancia con el daño producido. La primera institucionalización de esta venganza se llevó a cabo a través de la religión; de allí derivan la Ley del Tali3n y otras formas similares de justiciar normativamente la retribuci3n penal; este sistema supuso una moderaci3n de la venganza, a la que se limit3 en una cantidad exactamente equivalente al da3o sufrido por el ofendido: "ojo por ojo;

diente por diente”, según la ley mosaica. El avance de la civilización en su intento por eliminar la subjetividad e irracionalidad de la venganza por mano propia, acabó por construir al Estado, a través de la respuesta penal, con el propósito de evitar abusos e injusticias. El castigo dejó de aplicarse directamente en nombre del particular ofendido por el crimen, de su familia o clan, y éstos constituyeron sólo la excusa para que el Estado aplicara el castigo para su propia satisfacción, sin tener en miras el resarcirlo. Las sanciones cambiaron completamente su naturaleza. Dejaron de ser una forma de satisfacer el daño producido a una víctima concreta, y pasaron a ser un castigo impuesto por el Estado y para el Estado. El suplicio, la mutilación y la muerte fueron formas comunes de ese castigo, y con el correr del tiempo, la prisión apareció como una manera de humanizar la retribución penal.

2.2.4. EL DERECHO PENAL COMO RAMA AUTÓNOMA DEL DERECHO PÚBLICO

La estabilización de la respuesta penal en reemplazo de la venganza privada, hizo que el Derecho Penal adquiriera el carácter de Derecho Público, y como tal actúa independientemente aún de la voluntad de la víctima; el grueso de los delitos son de acción pública, es decir, que el titular de la acción penal es el Estado, que la ejerce a través del órgano jurisdiccional destinado para tal efecto. Por ello, no obstante que la víctima de un robo no tenga interés en que se castigue al ladrón, e independientemente de que éste la hubiese recompensado con creces por su acción, de todos modos el Estado, ejerciendo la titularidad de la acción penal, lo juzgara y le aplicará una pena; por consiguiente el verdadero titular del bien lesionado no tiene participación en el

proceso de retribución, más allá de actuar como querellante adherido al órgano estatal que es el verdadero titular de la acción - basado en el principio de Legalidad. El Estado al ejercitar el Monopolio en el ejercicio de la Acción Penal, no solo proscribire la venganza privada, sino que se irroga esa facultad a través del proceso, él es el que hará venganza por el privado.

2.2.5. LA LEGISLACIÓN PENAL COMO MEDIO DE LIMITAR EL PODER REPRESIVO DEL ESTADO: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Este Principio, se constituye fundamentalmente un es uno de los pilares básicos vinculados con el Derecho Penal Liberal; según éste, tanto las conductas que constituyen delitos como las penas que merecen los infractores deben estar previamente establecidas en la ley; esto como un modo de limitar el poder de los jueces, pues de lo contrario quedaría a su arbitrio la aplicación de sanciones. Este Principio apareció en el Derecho Continental Europeo y se considera a Feuerbach como quien lo postuló explícitamente por primera vez. Este autor encontraba dos funciones básicas al principio mencionado: 1) servir como disuasivo para que las personas no cometan delitos, al saber que si lo hacen serán castigadas y 2) proteger la libertad de acción de las personas, al advertirles previamente qué es lo que no deben hacer, pues de lo contrario serán pasibles de pena. Los teóricos del Derecho consideraron que este principio debe ser elevado al rango de garantía constitucional en la mayor parte de los derechos modernos. El Principio de Legalidad al constituirse en una garantía debía necesariamente ejercitarse en todos los casos, hasta conseguir una pena y una reparación civil a favor de la víctima, pero siempre teniendo como titular de la acción penal al Estado y no al sujeto agraviado. En

conclusión el Principio de Legalidad, estableció que conductas son las prohibidas penalmente, su descripción previa, el castigo y la venganza pública; dando la aparición ya no a un vengador privado, sino a un vengador público que es el titular del ejercicio de la acción penal, esto es el FISCAL, como figura que ejerce el "ius persiquendi", aún con ello el Estado no ejerce arbitrariamente su función, sino que lo hace a través, de una sanción denominada PENA, cuyos fundamentos son diversos como lo apreciaremos a continuación.

2.2.6. EL FUNDAMENTO DE LA PENA

Dejando de lado las posiciones abolicionistas quienes no están de acuerdo con la imposición de pena, existen tres teorías tradicionales que justifican la imposición de la pena por parte del Estado, no obstante los esfuerzos de muchos autores modernos, como Roxin, por elaborar teorías integrativas: a) Tesis de la Retribución, según el cual el sentido de la pena radica en que la culpabilidad del autor sea compensada mediante la imposición de un mal penal, justificado en el mal del delito. La Retribución fue históricamente la primera justificación de la pena, en sus inicios con un contenido religioso. Más modernamente, esta tesis absoluta fue sostenida en especial por Kant, quien justificó la imposición de la pena en el libre albedrío, desconociendo cualquier fundamento en razones de utilidad social. Para Kant, el autor de un delito debía responder porque tenía la libertad de comportarse de otro modo, y sin embargo eligió delinquir. Es decir, la teoría retributiva es la que más tiene en cuenta la conducta concreta del autor y menos los intereses de la sociedad, aun cuando en definitiva, por ser el Derecho Penal manifestación del Derecho Público, el castigo al autor de un delito siempre se



fundamenta en la necesidad de preservar a la sociedad frente a quien ha decidido cometerlo, b) Prevención General por esta teoría la pena debe evitar los delitos, mediante la producción de efectos psicológicos sobre la generalidad de las personas. Estas teorías suelen identificarse con el aspecto intimidatorio de las penas, pues su justificación estaría dada por su fin de evitar la comisión de hechos punibles respecto de sus potenciales autores. La prevención general actúa no sólo con la conminación general de penas, sino que adquiere su mayor efectividad con su imposición y ejecución. Se entiende que la conminación penal debe intimidar y la ejecución penal debe confirmar la seriedad de la amenaza. La Prevención General ha tenido mucha influencia en lo que se conoce como la "política criminal" es decir, el conjunto de decisiones estatales respecto de las estrategias a seguir para la persecución penal, lo que incluye establecer que delitos han de perseguirse con mayor cuidado, que conductas merecen mayor castigo, y que conviene despenalizar o tolerar, en un momento y en un lugar determinados; todo ello con la intención de dar determinadas señales a la comunidad respecto de cuál es la conducta esperada por el Gobierno ante situaciones específicas, c) Prevención Especial bajo éste punto de vista preventivo - especial, sólo es indispensable aquella pena que se necesita para evitar la reincidencia de cada autor en concreto. La prevención especial no requiere retribuir el hecho pasado, no mira al pasado, sino que ve la justificación de la pena en la prevención de nuevos delitos del autor. Según lo postuló Von Liszt, la prevención especial actúa de tres maneras: a) corrigiendo al corregible (resocialización); b) intimidando al intimidable; y c) haciendo inofensivos a quienes no son corregibles, ni intimidables. Ciertos autores, sobre la base de una antigua clasificación

escolástica, dividen a las teorías sobre la justificación de la pena en absoluta y relativas. Las teorías absolutas se identifican con las retribucionistas, que conciben a la pena como fin en sí mismo como castigo, compensación, reacción, reparación o retribución del delito, justificada por su valor axiológico intrínseco. Las teorías relativas o utilitarias, consideran y justifican a la pena sólo como medio para la realización del fin utilitario de la prevención de futuros delitos. Las teorías relativas quedan divididas a su vez, en las doctrinas de la prevención especial, que refieren el fin preventivo a la persona del delincuente, y doctrinas de la prevención general que lo refieren por el contrario a la generalidad de los asociados.

Si el justificativo de la existencia del gobierno es la necesidad de proteger derechos individuales concretos, sólo puede actuar el sistema judicial para evitar la lesión o en todo caso para paliar sus consecuencias y resarcir a la víctima, pero no se justifica el rol del gobierno como un "corrector" o educador, lo que supone una intromisión terriblemente peligrosa en la esfera de la libertad individual, que aún a quien ha cometido un crimen debe respetársele. Por ello pensamos que la única justificación de la intervención estatal es la protección de los derechos lesionados, y por ello coincidimos con la tesis RETRIBUCIONISTA, aunque debe aceptarse las críticas que se han hecho, pues tienen a acentuar el rechazo del Derecho Penal como castigo del Estado y por el Estado, lo que carece de una justificación racional.

2.2.7. ¿QUÉ RETRIBUYE LA PENA?

Si el derecho es el medio de garantizar la coexistencia pacífica entre las personas, y el Derecho Penal específicamente es el medio de RETRIBUIR a



los que comenten ciertas conductas violatorias de derechos individuales, vemos que esa retribución, en primer lugar, no se hace en nombre de la víctima sino del Estado, y en segundo lugar, tal retribución no implica ningún tipo de satisfacción específica para la víctima, sino que supone simplemente la satisfacción de una prerrogativa del Estado frente al individuo al que se castiga.

En ese sistema, la víctima se ve sometida a varias cargas, como las de concurrir a la comisaría y a los tribunales para prestar declaración, pero no obtiene a cambio nada más que la eventual satisfacción de saber que la persona que violó sus derechos fue encarcelada.

Precisamente, esta satisfacción que la aplicación de una pena al criminal otorgaría a la víctima, o en una visión más amplia a toda la sociedad, en los tiempos modernos se está poniendo en duda por dos circunstancias:

- a) El avance de la civilización hace que la gente tienda a sentir cada vez menos satisfacción por el sufrimiento ajeno, aun para quien ha violado algún derecho.
- b) Si se le diera la posibilidad de elegir a la víctima que el imputado vaya a la cárcel y ella no obtenga nada a cambio; o que el imputado quede en libertad, pero que se le obligue a pagar una indemnización, por el daño producido, o a realizar ciertos trabajos en su beneficio personal, o de algún modo reparar los daños ocasionados, las víctimas, en su mayoría elegirían ésta última posibilidad; pero el Derecho Penal con el Principio de Legalidad a su frente no lo permite. Esta posición ha generado en considerar un poco más a la víctima en el proceso penal creándose académicamente la asignatura de la "Victimología" que pretende entender mejor al agraviado en el proceso.



2.2.8. LAS CRÍTICAS A LA PRISIÓN COMO MEDIO RAZONABLE DE RETRIBUCIÓN

En el mundo moderno ya tenemos la tendencia del "abolicionismo" surgida en Europa a partir de los trabajos de Foucault, Baratía, Hulsman, Pavarini, etc, supone una crítica a la existencia del Derecho Penal. El Abolicionismo penal constituye un conjunto heterogéneo de teorías, doctrinas y actitudes unificadas por la negación de cualquier clase de justificación o legitimidad externa de la intervención punitiva sobre la desviación, por parte del Estado, pues este constituye una amenaza para la libertad individual, pues los delitos son establecidos por el propio Estado que impone las penas; pero el ejercicio del "ius puniendi" (a cargo del Poder Judicial) y del propio "ius persiquendi" (a cargo del Ministerio Público) se puede apreciar que se olvidan de proteger los derechos de las víctimas.

La única alternativa válida que se encuentra para solucionar el problema es SUSTITUIR a la prisión, en los casos de crímenes de escasa entidad, por medios de satisfacción a la víctima como resarcimientos pecuniarios, trabajo en su favor, etc, que signifiquen castigos más civilizados que la prisión y se apliquen de manera efectiva; por consiguiente se entiende que la mejor solución es, nuevamente, reemplazar a la prisión como medio de castigo, por formas de satisfacción a la víctima.

2.2.9. LA NECESIDAD DE PRIVATIZAR LA ACCIÓN PENAL

Las críticas a la esencia misma del Derecho Penal y a su autonomía respecto de quienes deberían ser los receptores principales de la protección jurídica, es decir, de las víctimas, me llevan a concluir que ha llegado la hora en



el proceso de civilización del Derecho, de sustituir la naturaleza misma de los procedimientos en casos criminales de eliminar el castigo eminentemente estatal y restituir a los particulares la acción para actuar en su propio nombre y beneficio.

El estudio de los orígenes de los Derechos que han fundado jurídicamente al mundo occidental moderno (el romano y el anglosajón), muestran que, originariamente, la distinción entre el Derecho Penal y el Civil no era tajante, y que el primero no era un Derecho totalmente público, sino que tenía como titular de la acción a la víctima. En roma, en los albores de la República, el Derecho Penal tenía un trazado distinto del que hoy conocemos, pues una buena parte de lo que hoy es materia del Derecho Penal pertenecía al Derecho Privado bajo la forma de delicta privata (Kaser, ZPR, p,1). Delitos como el robo, el hurto o la injuria, eran perseguidos por el damnificado mediante la acción privada; esa pretensión jurisprudista de satisfacción se hacía valer en el proceso civil y era realizado por una composición en dinero (pagada al damnificado) o librando al autor a la venganza privada (en algunos casos por azotes). En el Derecho Romano clásico, la regla era la acusación privada. Sólo compareciendo un acusador (que no fuese al mismo tiempo juez), había lugar a un procedimiento penal.

En el derecho Anglosajón tampoco existía la distinción entre el Derecho Civil y Penal. Los particulares damnificados por un crimen debían demandar en nombre propio ante los jueces la satisfacción de la ofensa recibida. De este modo proliferaron los abogados que compraban las acciones a las víctimas poco interesadas por perseguir los delitos, y buscaban ellos una reparación. Inclusive las órdenes de detención y registros eran extendidas por los jueces



de paz a pedido de los representantes de las víctimas, que eran quienes llevaban adelante las investigaciones. Ellos fueron los antecesores de los Fiscales, que adoptaron la fisonomía que hoy tienen en prácticamente todos los Derechos del mundo.

En el derecho Alemán primitivo, se pasó de la venganza privada y la falta a un sistema retributivo de composición judicial que se hacía en beneficio particular de la víctima. Con posterioridad se abandonó este principio para convertir esa composición en una retribución para el Estado. Lo que era una indemnización para la víctima, se transformó en una multa que va a parar a las arcas del gobierno.

En el derecho Oriental, donde la legitimación para accionar estaba en la víctima y su familia. Por eso, para protegerse jurídicamente ante la comisión de un crimen en su contra, las personas huérfanas normalmente se hacían adoptar por alguna familia, para que de este modo alguien pudiese ejercer las acciones penales en su nombre, y desalentar así la comisión de crímenes en su contra.

En resumen se puede encontrar en el origen de casi todos los sistemas judiciales un Derecho Penal que se ejercía por la víctima en su propio nombre. Todos estos fundamentos, hace pensar que la "privatización" de la acción" probablemente traería muchas ventajas respecto de la eficiencia en la persecución de los crímenes; pues como hoy en día los Fiscales en general no tienen un interés personal en el resultado del juicio, no cobran honorarios por sus éxitos y rara vez responden por sus fracasos, la eficiencia de la investigación ha disminuido. Para el caso de las víctimas de delitos de escasa peligrosidad, como arrebatos de carteras, robos de estéreos en automóviles,



celulares, hurtos, roturas de vidrieras en negocios, pequeñas estafas, frecuentemente ni siquiera se toman la molestia de efectuar una denuncia policial. Deberán concurrir a la comisaría y posteriormente varias veces a los tribunales para prestar declaración, perdiendo tiempo y dinero; en el caso en que se llegue a individualizar al criminal, lo máximo que pueden obtener es que se le condene a prisión, lo que a la víctima no le sirve de mucho. Por el contrario, en el caso en que se pudiese buscar una retribución en nombre propio y en el propio beneficio, seguramente las víctimas tendrían mucho más interés en que se investigasen los crímenes cometidos en su contra, y esa señal enviada al mercado movería importantes cantidades de recursos hacia la investigación y persecución de estos hechos. Podrían aparecer empresas de abogados como ocurrió en la antigua Inglaterra, dispuestas a comprarle a las víctimas la titularidad de la acción, corriendo el riesgo de perseguir al autor y tratar de obtener una reparación; el sistema se desperfeccionaría, pues la inversión de dinero en tecnología para descubrir a los autores de crímenes, con mejores y cada vez más sofisticados detectores de huellas, rastros, voces, cámaras fumadoras, etc.; en suma, la persecución de los crímenes cobraría una importancia para las víctimas, y ello haría aumentar su valor económico, convirtiéndola en un foco de inversiones.

2.2.10. LA PRIVATIZACIÓN DE LA ACCIÓN AUMENTARÍA EL EFECTO PREVENTIVO GENERAL DEL DERECHO

No es posible justificar la imposición de una pena exclusivamente en la aludida función preventiva general del Derecho Penal, es decir, en la circunstancia de que la amenaza de una pena tenga una función disuasoria



respecto de la gente para que de ese modo se abstenga de violar derechos ajenos. La Función Preventiva General existe, pero no puede ser el fundamento de la condena. La privatización de la acción penal aumentaría el efecto de la prevención general, pues al hacer más eficiente el sistema basado en el propio interés de las víctimas por lograr una satisfacción por el mal recibido, las posibilidades de impunidad disminuirían.

Especialmente en los delitos de escasa peligrosidad, la sanción con la que sería amenazado el criminal podría llegar a ser más gravosa en términos reales de lo que hoy en día es. Si se tiene en cuenta que, por un principio liberal, existen varias formas de evitar el encarcelamiento efectivo para los primarios, resultaría en los hechos más graves para el criminal ocasional que difícilmente vuelva a delinquir, la obligación de resarcir los daños a la víctima, en lugar de la imposición de una simbólica pena de prisión en suspenso.

Ningún funcionario del gobierno puede tener la facultad de determinar qué es "socialmente" bueno o malo, y debe limitarse a proteger los derechos individuales de víctimas concretas. A ello debe sumarse que las cárceles tienen muy poco de positivo desde el punto de vista de la superación personal de quien ha cometido un crimen. A estas alturas de la civilización, el Derecho Penal debería ser reformulado y dar lugar a formas o procedimientos mixtos, basados en la demanda de las propias víctimas en busca de sanciones que constituyan una reparación de los daños ocasionados con el crimen. Ello supondría dos cambios fundamentales respecto a la actual respuesta penal: a) a las acciones serían ejercidas por las víctimas o sus representantes, y no por el Estado; b) las sanciones a imponerse estarían exclusivamente vinculadas

con la reparación del daño ocasionado a la víctima y no con un castigo impuesto por el Estado.

2.2.11. LA VICTIMOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD

La Victimología, (JINEMES DE ASÚA 1961, p.113), puede ser definida como la ciencia multidisciplinaria que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimación y desvictimación. Conciernen pues a la victimología el estudio del modo en que una persona deviene víctima, de las diversas dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y terciaria) y de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima. La Victimación, es el proceso por el que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático; en ese sentido para entender ello, debemos distinguir dos dimensiones del mismo, por una parte, la consideración de los factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o traumatizante; por otra parte, el impacto de tal hecho sobre la víctima, eso es, el modo de vivir la experiencia de la victimación y el conjunto de condiciones de las que el impacto del hecho depende. En sintonía con el reconocimiento de esta doble dimensión, vamos a referirnos también a la distinción entre víctimas de riesgo y víctimas vulnerables; las primeras aluden a la persona que tiene mayor probabilidad de ser víctimas; y por víctima vulnerable, aquella, que, cuando ha sufrido una agresión, queda más afectada psicológicamente por lo ocurrido en función de la precariedad emocional; la literatura victimológica se ha centrado en la primera dimensión, esto es el estudio de la experiencia individual, subjetiva y relativa culturalmente, el estudio

de la víctima en tanto fenómeno complejo, obliga a considerar los factores de carácter individual, social y cultural que determinan el hecho de llegar a ser víctima que, por otra parte, condicional y modulan el modo de vivir la referida experiencia. En cambio, en su segunda dimensión se entiende que las víctimas vulnerables son las que sufren el impacto traumático, el estudio ha discurrido en parte en torno a la categoría psiquiátrica del trastorno por estrés postraumático; el desarrollo científico en el conocimiento del impacto psíquico permite la evaluación del mismo, lo cual puede tener cuantificación de daños indemnizables o, en su caso, la determinación de la medida de la pena a imponer al responsable del hecho delictivo, (WALKLATE, 1982, p. 146), con lo cual se rechazan categorías anacrónicas como el "daño moral" todavía usados en el ámbito jurídico, los cuales constituyen grandes los riesgos de irracionalidad en la cuantificación de indemnizaciones y de explotación de la condición de víctima.

2.2.12. LA DESVICTIMACIÓN Y LA REPARACIÓN

El otro foco de interés de la victimología es la desvictimación proceso complejo en el que intervienen múltiples factores y múltiples actores. Ha sido definida como un proceso de reparación o de reconstrucción. La reparación, así entendida, no en el sentido de indemnización de perjuicios, pasa por el reconocimiento social y la asistencia de perjuicios, pasa por el reconocimiento social y la asistencia, amén de la prevención de la revictimación. Con la formulación de la desvictimación como aspecto nuclear de la victimología se sitúa en un lugar preferente la reintegración social de la víctima y se trata de conjurar riesgos tales como la estigmatización de la víctima real o supuesta, la



transmisión de la imagen de una posible rentabilidad de la atribución de la etiqueta de víctima o incluso, como en algún momento se ha advertido, el riesgo de la construcción de una "sociedad de víctimas". Así como la acción preventiva debe tener como objetivo las víctimas potenciales, la intervención con las víctimas reales, una vez se ha producido ya el hecho traumático, debe orientarse fundamentalmente a la desvictimación. Los actores implicados en esta tarea son, principalmente, el sistema de justicia penal, los policías, los servicios sociales y los profesionales médicos o psicólogos que realizan labores de asistencia. Con todo, la proyección social adquirida por las víctimas produce una ampliación de los actores, de modo que entre éstos se encuentran los responsables políticos y los colectivos profesionales con responsabilidad social, como los medios de comunicación, o los agentes morales (por ejemplo las instituciones religiosas). Los comportamientos y actitudes de los diversos actores pueden coadyuvar de modo eficaz a la superación de la situación de la victimación, que es, junto al reconocimiento, la principal necesidad objetiva de las víctimas. Por ello resulta del máximo interés estudiar mecanismos que permitan hacer efectivo el reconocimiento de la condición de víctimas, la manifestación simbólica de su sufrimiento, como algo independiente de los efectos que puedan derivarse de la misma. También las entidades de apoyo a las víctimas y las asociaciones de víctimas deben tender hacia el objetivo de la desvictimación. Como se desarrollará más adelante, el Asociacionismo victimal puede ser un importante instrumento de apoyo a las víctimas, que les permiten afrontar su situación desde la comunicación, el trabajo solidario, la elaboración del duelo, la sublimación de instintos de venganza mediante el acometimiento de objetivos social y personalmente provechosos o la presión política para

hacer llegar sus inquietudes y necesidades o lograr que se hagan efectivas acciones sociales de apoyo, indemnización o reconocimiento. Pero no pueden olvidarse los riesgos inherentes a estas asociaciones, en la medida que, en el orden psicológico, puedan alimentar más la instalación en la victimación que la superación de la misma, o, en una dimensión social, puedan actuar al servicio de una política criminal demagógica.

2.2.13. PREVENCIÓN EN EL SISTEMA PENAL

La prevención es, de entrada, la finalidad principal del sistema penal. Entendido el Derecho penal como instrumento de resolución de conflictos, la pena estatal tiene una doble dimensión preventiva - general y especial - en cuanto a la dimensión especial de la criminalidad, de acuerdo con la misión general de tal rama del Derecho de Protección de los bienes jurídicos más relevantes para la convivencia. El sistema penal previene delitos y previene a la vez la satisfacción de los instintos a la escalada de la victimación que derivaría de la legitimación de la autotutela o de la anarquía punitiva. Por tanto, debe haber programas basados en la reducción de riesgos, o a cuestiones relativas a la salud pública o modelos de intervención policial. Es este un terreno, en el que la victimología se cruza con la seguridad incluso con la arquitectura, el urbanismo o la organización escolar o empresarial. Se suele distinguir entre prevención primaria, secundaria o terciaria. La Prevención primaria, actúa sobre la comunidad, a base de mejorar las condiciones de seguridad colectiva y de bienestar del entorno. La prevención secundaria se produce en las víctimas potenciales, especialmente entre los colectivos más vulnerables, a través de estrategias de autoprotección y de reducción de riesgos. La

prevención terciaria supone la intervención sobre quienes ya han sido víctimas, al objeto de evitar el riesgo de revictimación. Desde una perspectiva victimológica debe denunciarse la falacia consistente en equiparar mayor protección de las víctimas con mayor protección penal. La política criminal debe estar atenta en general, como protección penal. La política criminal debe estar atenta en general, como ya se ha indicado, a la necesidad de ponderar los costes de la penalización con los beneficios esperados en términos de prevención, y en especial a los efectos negativos inducidos por la intervención penal sobre las mismas víctimas.

2.2.14. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL NUEVO PROCESO PENAL

En el plano político- criminal, los derechos de las víctimas pueden estructurarse en torno a cinco conceptos extraídos de la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la Víctima en el Proceso Penal, debemos desarrollar sucintamente cada uno de ellos: a) Información, el derecho a la información sobre la evolución de la causa penal derivada del hecho punible sufrido, sobre sus posibilidades de participación, constituyen derechos que deben gozar de una posición preferente desarrollado en el Artículo 4º de la Decisión Marco aludida, los amplios contenidos de esta norma permiten adoptar acuerdos entre la Fiscalía y las administraciones de las que dependen los Servicios de atención a las víctimas para que sean éstos los que informen a la víctima en el modo y momento más conveniente, por ejemplo las excarcelaciones o la salida temporal del centro penitenciario o el levantamiento de control sobre el infractor, así como la variación de la detención, la suspensión de la ejecución



de penas de prisión, permisos penitenciarios, entre otras, el derecho de información para el caso peruano está previsto en el artículo 95°, ordinal 1°, inciso a) del NCPP; b) Participación, Los derechos de participación se manifiestan en diversas exigencias. En primer lugar, el artículo 3°-1 DM establece el derecho de audiencia y el derecho a facilitar medios de prueba, derechos cuya realización efectiva puede articularse a través del derecho a mostrarse parte y a constituirse en acusación particular; se impide la confrontación visual entre el imputado y la presunta víctima o el careo en caso que ésta sea mayor de edad, no debe haber la posibilidad de acordar que la declaración de las víctimas especialmente vulnerables no se reproduzca en el juicio oral si ello, oídas las partes, no se estima necesario para los fines del proceso, exigen una reforma legal(33); un capítulo fundamental es el referido al cambio cultural tiene que ver con el desarrollo de la justicia reparadora, en su manifestación más divulgada, este nuevo paradigma es la mediación penal; también éste derecho se encuentra reconocido en el artículo 95° ordinal 1°, inciso b). c) protección, el artículo 8 DM establece el deber de los Estados de proteger a las víctimas en lo que respecta a su seguridad e intimidad, siempre que exista un riesgo grave de represalias o claros indicios de una intención clara de perturbar la vida privada. Una de las medidas más usadas es la necesidad de protección de las víctimas frente a los testigos y peritos en causas criminales, en ese sentido se acuerda que no deben constar los datos personales en las diligencias, que en las comparecencias físicas se imposibilite la identificación visual, que se fije como domicilio para citaciones la sede del órgano judicial, o que se prohíba captar imágenes. También debe acordar protección policial, nueva identidad y medios económicos para cambiar de



residencia o de puesto de trabajo. Estas medidas parecen concebidas para cierta clase de testigos, de modo que puedan quedar fuera de consideración de riesgos; también el artículo 8 DM extiende el derecho a la protección a los familiares de las víctimas o, si procede, personas en situación equivalente. Deben haber en este terreno protocolos de buenas prácticas e inversiones, al objeto de poder disponer de dependencias judiciales y policiales, e incluso sanitarias, de espacios de espera reservados a las víctimas, de modo que se reduzca la oportunidad de contactos con el imputado y personas en su entorno (artículo 8-3 DM), también el modo de tomar testimonio o de dirigirse a las diversas clases de víctimas, con especial consideración a las más vulnerables. La protección de la intimidad y de la imagen física de la víctima o sus familiares, a que alude también el artículo 8 DM, de igual manera respecto a la protección del honor, la intimidad y la propia imagen, en estos debe convocarse la ayuda de la Defensoría del Pueblo; el NCPP, también reconoce éste derecho en el Artículo 95° ordinal 1°, inciso c); d) asistencia, La asistencia se proyecta más allá de los estrictos causes del proceso penal. El Artículo 6° DM exige que no baste con el mero derecho a la asistencia letrada, pues incluye cualquier otro tipo de asesoramiento, referido a su papel en las actuaciones. La asistencia jurídica gratuita aparece en un segundo plano, pues se halla condicionado a que la víctima pueda ser parte en un proceso penal. Esta concepción integral del asesoramiento resulta muy adecuada, pues abarca la explicación sobre el proceso, sobre su sentido, de modo que la persona afectada pueda familiarizarse con los escenarios con que se va a encontrar. La asistencia puede ser psicológica, psiquiátrica y social que puedan verse afectadas. Esta proyección multidimensional es uno de los sellos de identidad



de la victimología y plantea la necesidad de profesionales con una formación en las diversas disciplinas, básicamente psicológicas y jurídicas, y dotados con habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, entre ellas tienen que ver los acompañamientos a las víctimas y la posterior asistencia tal como lo consigna el artículo 13º DM; esto con la finalidad de ofrecer confianza a la víctima que se muestra receloso, frente a la administración pública (como el Poder Judicial, la policía y otros); éste tiene un reconocimiento limitado en el NCPP, al extremo que si bien el imputado debe tener derecho a un defensor de oficio, tal prerrogativa no lo tiene la víctima, el Abogado de Víctimas y testigos del Ministerio Público no defiende, ni patrocina, solo asiste en aspectos muy puntuales, el Ministerio de Justicia, tampoco tiene abogados para las víctimas, recién está implementando defensores de oficio para víctimas de violencia sexual contra menores de edad; y d) reparación la victimología reclama un concepto amplio de reparación. La reparación penal no puede identificarse con el contenido de la responsabilidad civil derivada del delito, por las siguientes razones: abarca también la compensación del daño social producido por el delito, además del ocasionado en las personas singulares perjudicadas, de ahí la apertura a la reparación social o simbólica; exige un esfuerzo personal relevante al responsable penal de la infracción; atiende a la pluralidad de dimensiones del daño provocado por el delito, lo que tiene un contenido fundamentalmente no económico; incluye un canon de exigibilidad, en virtud del cual se excluyen prestaciones no asumibles por el infractor (principio de la reparación en la medida de la propia capacidad); si bien éste derecho no tiene un reconocimiento expreso en el Nuevo Código Procesal Penal, sí lo tiene en el Código Penal.

2.2.15. LA VÍCTIMA Y EL CONSENTIMIENTO EN EL CONFLICTO PENAL

Conforme a las eximentes de la responsabilidad penal, el artículo 20°, ordinal 10° del NCPP, precisa que el consentimiento en ocasiones puede conducir a la exclusión de la responsabilidad penal. La doctrina tradicional alemana distingue en la Teoría de la Diferenciación al Acuerdo del Consentimiento. Se incluyen en el ACUERDO, todos los delitos que se dirigen directamente contra la voluntad de la víctima y su libre ejercicio, en los que se considera que el consentimiento a la lesión del bien jurídico conduce a la desaparición de la lesividad del comportamiento, e incluso en ocasiones a la propia acción delictiva tipificada, con lo que no se duda acerca de la capacidad de este expediente para excluir la propia tipicidad de la conducta. En cambio el CONSENTIMIENTO es excluyente de responsabilidad penal a la disposición del bien jurídico por parte de la víctima, aun cuando en tales casos se considere que la lesión de interés jurídico por parte de la víctima, se considere que la lesión de interés protegido no desaparece por causa de aquella anuencia, lo que conduce a que la resolución de tales supuestos se vincule a través de la justificación. El bien jurídico puede ser de dos categorías si es individual o colectivo: en cuanto al bien jurídico individual si es de carácter personalísimo es un bien disponible (CLAUS ROXIN, 2008, p. 253) que permite en ocasiones que la persona se realice como tal, pero eso no significa entender que hay bienes jurídicos de corte liberal, que se impone contra la voluntad del propio titular, imponiendo a la víctima un deber de conservación del sustrato material, y esto tiene efectos positivos. Pues se limita la capacidad de disposición, por tanto una Concepción de los bienes jurídicos personalísimos como esencialmente disponibles NO debe conducir a negar la realidad de que



éstos no siempre representan valores in materialización, de forma que únicamente sea determinante para decidir acerca de la tipicidad de una conducta la concepción que sobre determinado sustrato material tenga el titular del interés; caso contrario nos conduciría a una subjetivización a ultranza de los bienes jurídicos individuales. Esto tiene que tenerse presente, para entender como en los Acuerdos Reparatorios se pueden negociar sobre bienes jurídicos disponibles. Al respecto, debe indicarse que existen bienes jurídicos cuyo menoscabo no se duda que requiere la ausencia de anuencia de la víctima de forma que el consentimiento prestado por éstas se acostumbra a admitir que excluye la propia tipicidad. Son los supuestos que tradicionalmente se han venido identificando con el acuerdo, así sucede en los tipos contra la intimidad, el honor, la libertad, la libertad sexual o el patrimonio, en que en ocasiones el propio delito incorpora como elemento negativo del tipo la necesaria ausencia de consentimiento del titular. La dificultades se centran, pues, en aquellos bienes jurídicos individuales acerca de la absoluta disponibilidad se duda, o cuando menos en relación con los cuales ha venido siendo afirmada como mucho la eficacia total o parcial justificante del consentimiento. Así sucede con la vida o con la salud (por ejemplo los delitos de homicidio culposo o lesiones graves culposas o dolosas leves).

Por cuanto se refiere a la posibilidad de disponer de la propia vida, el Derecho penal peruano la admite de manera restringida, en tanto no incrimina el suicidio; sin embargo, el efecto excluyente de la responsabilidad penal que muestra la voluntad de la víctima cuando se trata del propio comportamiento no alcanza a las intervenciones habidas de terceros en la muerte querida. En ese



sentido, el artículo 113° C.P. incrimina tanto la inducción, como la cooperación necesaria y la cooperación ejecutiva al suicidio, aunque confiere un trato penal privilegiado a dichos supuestos en relación con el correspondiente a las respectivas conductas cuando supongan intervención en un homicidio; considera por tanto al instigador al suicidio como un delito privilegiado imponiendo penas privativas de libertad no menor de uno, ni mayor de cuatro, y si el móvil fue egoísta la pena será no menor de dos ni mayor de cinco años; pero, para el caso de un homicidio la pena mínima es de 6 años y con una no mayor de veinte años. Así como el suicidio es atípico, se incrimina como supuestos privilegiados en relación con las homologas formas de participación en el homicidio tanto el delito de homicidio por piedad, (Art. 112° del C.P. Tipifica “ El que por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años), es evidente que el legislador peruano privilegia más al homicidio piadoso que a la instigación y ayuda al suicidio al imponer mayor pena a este que aquel. La misma racionalidad se produce en el aborto con consentimiento de la madre gestante, al caso de las lesiones ocasionadas con el consentimiento de la víctima; en todos éstos casos como se puede apreciar se da la vida en posibilidades de ser un bien jurídico disponible y por tanto puede ser sometido a un Acuerdo Reparatorio, dependiendo del caso en concreto; de modo tal que entender cómo funciona el CONSENTIMIENTO en las salidas alternas es importante para el operador jurídico.



2.2.16. LA JUSTICIA REPARADORA Y SU ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA PENAL

La Justicia Reparadora ha sido formulada en sus orígenes (Zehr, 1985) como un paradigma alternativo de justicia, entendido como contrapuesto al modelo retributivo propio del sistema de justicia penal. Es una teoría de la justicia que enfatiza la reparación del daño causado por el comportamiento delictivo a través de procesos cooperativos en los que toman parte las personas involucradas en el mismo. La concepción de delitos como ruptura de las relaciones humanas y sociales antes que como violación de la ley se encuentra en el fundamento del referido paradigma, que sirve a un ideal de humanización de la justicia. Con estos contenidos, la idea de la justicia restaurativa se plasmó en el Congreso Internacional de Criminología de Budapest de 1993 y ha ganado impulso a través de los Simposios Internacionales de Victimología de Adelaida (Australia) en 1994, Ámsterdam en 1997 y Montreal en 2000. Los referidos contenidos pueden sintetizarse en la Justicia Restaurativa (Marshall, 1996, p.37) como "un proceso de que todas las partes afectadas por una ofensa llegan conjuntamente a resolver de forma colectiva el modo de tratar la situación creada por la ofensa y sus implicaciones para el futuro". El proceso reparador se caracteriza por su carácter informal y por estar basado en el diálogo entre las partes. Con todo, no es la falta de formalidad lo que lo caracteriza sino que tal dato permite en su caso distinguirlo de procedimientos altamente formalizados como es el proceso penal convencional. Los procesos RESTAURATIVOS pueden de hecho regirse por ciertas reglas y existe en los mismos cierta lógica procedimental. Su caracterización en positivo debe efectuarse con base en tres notas: a) el



protagonismo y la participación de las partes en la expresión de sus necesidades y la adopción de compromisos; b) la facilitación de un diálogo ordenado pero con contenido emocional; c) la aspiración de hallar una solución asumida por todas las partes en la que se establezcan las condiciones de la situación que debe suceder al conflicto.

El Proceso Restaurativo, puede materializarse en una diversidad de prácticas, entre las cuales la más conocida en nuestro entorno es la MEDIACIÓN; sin embargo en determinados ámbitos científicos y culturales se ha introducido lo que se denomina la "conferencing o circles" (Umbreit 2001,p1) que equivale a conferenciar en circular o conferenciando en círculos, esto implica que la solución al conflicto es que sea positivo para la víctima y el infractor, inclusive comprende la comunidad; si bien la MEDIACIÓN busca acercar a las partes en un caso de delito de libertad sexual por ejemplo, éste tiene una visión reduccionista, pues qué duda cabe que esta clase de delitos alcanza también a la Comunidad que no es considerado por la mediación, que si trata de comprender los "circles". Pese a estas limitaciones la Mediación es parte de una cultura antiformalista y de aspiraciones pacificadoras y ha penetrado en diversos sectores de la vida social sujetos al Derecho y ha propiciado soluciones basadas en la negociación, la transacción o el diálogo que evitan el recurso a una Administración de Justicia vista como aparato burocrático incapaz de dar satisfacción a los intereses de los justiciables. Así, en buena medida la práctica de la mediación penal es el resultado de una voluntad de transferir al ámbito penal el *modus operandi* propio de la mediación familiar, laboral o mercantil, o incluso de la resolución pacífica controversias en la escena internacional. En ese sentido, no puede pasar por alto la



potencialidad de la justicia reparadora en la respuesta a nuevos fenómenos que incumben a la victimología y que se sitúan en gran medida fuera de los confines del Derecho penal, como las conductas al que nos hemos referido, que en especial son aplicados a los menores de edad.

En ese sentido los partidarios de la Justicia Restaurativa han visto en estas nuevas experiencias una oportunidad para devolver a los protagonistas del hecho, y en concreto a la víctima, el poder que les ha sido sustraído como consecuencia del proceso histórico de centralización del poder y de asunción por parte del Estado del monopolio en la respuesta al delito; por eso con esta concepción RESTAURATIVA de la justicia se propone "restaurar" la armonía social, recomponer los lazos humanos y sociales rotos, en vez de castigar y provocar nuevas rupturas, y aspirar a superar el paradigma retributivo con un afán por mirar más hacia el futuro que hacía el pasado: se reconoce a los delincuentes como personas al considerarles como sujetos capaces de comunicación y susceptibles de llevar a cabo compromisos reparadores y de ser reintegrados a la sociedad. También la justicia reparadora se aleja de contenidos disuasorios, en la medida que se aspira a superar la dinámica punitivista e incapacitadora, e incluso rehabilitadora, propia de las sanciones penales convencionales, a favor de una dinámica generadora de buenas relaciones, mutualismo, paz y bienestar, que sublime los instintos de venganza en sentimientos positivos hacia los otros y un reforzamiento de la autoestima y que permita ver en la responsabilización del infractor una oportunidad para ponerlo en una posición de confianza y participación en la comunidad. La Justicia reparadora ha emergido como una respuesta a otros enfoques social y jurídicamente desestabilizadores, como los de ciertas corrientes de

pensamiento feminista, basados en una "retórica de la venganza" (Acorn, 2004, p. 3)

2.2.17. POSTULADOS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA

a) El delito es una ruptura de las relaciones humanas antes que una infracción de la ley. Se considera al delito más por lo que supone de lesión o de perjuicio en los bienes de las personas y de la paz social que por la dimensión subjetiva de la infracción, que es considerada como manifestaciones de moralismo decimonónico o de decisionismo judicial.

b) La realización del hecho delictivo crear una situación en la que se abre una serie de riesgos y de oportunidades para enmendar el estado de cosas que había podido favorecer al delito y para reparar las consecuencias del mismo.

c) Una intervención reparadora debe abordar como prioridad la atención a la víctima primaria y en segundo lugar a las víctimas secundarias. Para el ofensor, se abre la oportunidad de incidir sobre el mismo para mejorar su interacción con la comunidad.

d) La respuesta reparadora ante el delito tiene como principios la mínima coerción, la cooperación y el restablecimiento de las relaciones humanas.

e) La Justicia reparadora trata de establecer una estructura cooperativa que favorezca la asunción de responsabilidades.

f) El proceso reparador exige una conducción profesionalizada. Resulta necesario la figura del facilitador, alguien ajeno al hecho y a las partes que debe preparar con éstas el escenario del posible diálogo, explorar su

capacidad y disponibilidad para tomar parte en el mismo y adoptar estrategias que permitan una comunicación que pueda resultar satisfactoria para todas ellas, favoreciendo que ellas mismas encuentren soluciones viables y proporcionadas.

g) El acuerdo reparador que pone término a un proceso reparador exitoso debe contener compromisos razonables y proporcionados y respetuosos con la dignidad humana.

h) Son necesarias estructuras de seguimiento y responsabilización que se sirvan, en la medida de lo posible, de la comunidad natural; lo que implica que si bien se comenzó aplicando a los delitos de bagatela, a los delitos menores, a los delitos de menor reproche social, no hay impedimento para aplicarlos a delitos mayores o graves, solo que se hace necesario mejorar progresivamente sus criterios en la aplicación para estos delitos.

2.2.18. REPARACIÓN ANTES QUE LA SENTENCIA

Debe distinguirse dos momentos fundamentales, de la ABSTENCIÓN del ejercicio de la acción penal ANTES o DESPUÉS de la FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA; si es ANTES el legislador peruano ha otorgado al Ministerio Público la capacidad limitada para decidir la no incoación de la acción penal en dos casos: cuando se trata de delitos cuyas penas son mínimas, de bagatela o de mínima culpabilidad como es el caso de la aplicación del Principio de Oportunidad; igualmente cuando se trata de bienes jurídicos patrimoniales permite la aplicación de los Acuerdos Reparatorios, aunque para éste aspecto también amplía la abstención tratándose de delitos culposos, de modo tal que puede ingresar también un delito de homicidio



culposo donde no haya pluralidad importante de víctimas; en ambos casos debe darse la aceptación voluntaria en la reparación del daño ocasionado por el delito o exista acuerdo en tal sentido; éstos supuestos hace que el Ministerio Público se ABSTENGA del ejercicio de la acción penal, situación que lo vamos a desarrollar con más profundidad en los siguientes capítulos. Si el Proceso ya se FORMALIZÓ, también se puede dar el Principio de Oportunidad y los Acuerdos Reparatorios, pero será el Juez, quien apruebe el SOBRESEIMIENTO solicitado por el Fiscal, es decir, el desistimiento en el ejercicio de la Acción Penal está condicionado a la aceptación por el Juez, no considero que finalmente sea el Juez quien es el que se abstiene de ejercitar la acción penal, sino que el hecho que el caso sea sometido a su jurisdicción implica que el Juez actúe como un CONTROL INTERÓRGANO aceptando o no la abstención del Fiscal, que en buena cuenta es un DESISTIMIENTO; queda claro, que en AMBOS CASOS el DESISTIMIENTO en la continuación del mismo por conciliación es por la reparación que cumple u ofrece cumplir el ofensor a favor de la víctima. En conclusión, el Ministerio Público podrá abstenerse del ejercicio de la acción penal sin intervención del Juez si es que no ha formalizado la investigación preparatoria, y si ya lo hizo, requiere de la intervención del órgano jurisdiccional. Este aspecto espinoso también lo asumo en ésta investigación con una propuesta muy concreta como se verá.

De todo esto se colige que a nivel de la investigación preliminar, un Fiscal no puede abstenerse en el ejercicio de la acción penal, fuera de los supuestos contemplados en el artículo 2° del NCPP sea para el Principio de Oportunidad o para los Acuerdos Reparatorios, es decir, no está en su discreción continuar o no continuar con el ejercicio de la Acción Penal, sino que la ley le da

extremos taxativamente fijados o límites a tal facultad, que si las desborda indudablemente incurre en responsabilidad penal, civil y administrativa. La existencia de delitos cualificados hacen que el DESISTIMIENTO del Fiscal no se pueda producir, ni tampoco se permite al Juez dictar el SOBRESEIMIENTO en el caso de existir una FORMALIZACIÓN ya en curso, en cuyo caso también será responsable de admitir semejante abstención del ejercicio de la acción penal.

2.2.19. SOBRE EL CONTENIDO DE LA REPARACIÓN CIVIL

Hemos podido observar todavía estamos lejos de una JUSTICIA RESTAURATIVA, pues hay casos en los que no se trata igual a quien cometido un delito consumado y otro en grado de tentativa; también en ocasiones el imputado y la víctima no son informados debidamente de las consecuencias de llegar a una conciliación o mediación en el conflicto que están inmersos; igualmente se exige que la reparación civil sea verdaderamente efectiva y no se quede en el mero compromiso sino que se cumpla la verdadera prestación pactada por el infractor; otro aspecto importante es considerar que la reparación acordada en una salida alterna como son los acuerdos reparatorios o principio de oportunidad son o no son independientes de la responsabilidad civil derivada del delito, este es un tema que conviene aclarar con especial cuidado en diversos foros profesionales jurídicos o sociales; aunque por ahora nos inclinamos a decir, si la voluntad de las partes condiciona al ejercicio de la acción penal por parte del Fiscal, porque no podría cerrar el debate respecto a la reparación civil si las partes están de acuerdo en los daños ocasionados por el delito? Doctrina autorizada considera que, si las partes llegan a la aplicación

de una salida alterna como es el Principio de Oportunidad o un Acuerdo Reparatorio, la auténtica reparación civil entendida como indemnización civil es autónoma y debe ser fijada por el Juez. (TAMARIT SUMALLA Colombia 2006 p. 362), situación diametralmente opuesta en nuestro país, pues ella la fija el Fiscal, pero no por ello resulta ser mala, sino que se trata de una opción legislativa, en todo caso debemos pedir que su fijación debe ser acorde a los extremos de una Justicia Restaurativa.

2.2.20. ACUERDOS REPARATORIOS:

LINEAMIENTOS DE UNA SOLUCION

Descrita la situación anterior, tenemos dos opciones o nos conformamos con la regulación vigente o nos revelamos ante el engaño planteando soluciones posibles a esta problemática que se presenta.

Como paso previo es fundamental rescatar que si bien la crisis en la administración de justicia ha significado el fracaso del principio de legalidad y la huida a medios alternativos de soluciones de conflictos, ello debe significar acudir a la formulación de criterios de oportunidad en el sentirlo de solo asignarle la tarea de ser un mecanismo efectivo de selección de casos penales. José Angulo Arana, "... se espera – con el Código Procesal Penal – que la aplicación de la oportunidad contribuya, en modo crucial a disminuir la carga penal. (Angulo Arana. 2004, p. 15.), sin asignarle la tarea de buscar la solución de conflictos que se presentan y con ello decidir acerca de cuáles conflictos merecen tutela penal sin asignarle una tarea de buscar la solución de estos. Enrique Bacigalupo Zapater, remarca que "...por principio de oportunidad no debe entenderse exclusivamente una renuncia bajo ciertas condiciones a la

acción penal por parte del Fiscal, sino, más bien, un tratamiento penal diversificado del conflicto social representado por el hecho delictivo. Descriminalización y Prevención. Bacigalupo Zapater, p. 14.), éste debe ser útil en la medida que permita diferenciar la gravedad de los conflictos que merecen tutela penal y cuáles no ésta y no otra debe ser su principal función, asignarle una tarea distinta es subvertir su contenido porque es evidente que el principio de oportunidad coopera a la descarga de una administración de justicia que se ve desbordada por el número de causas penales que llegan a su conocimiento. Armenta Deu, Teresa. Criminalidad organizada y principio de oportunidad, Alemania y España. (Deu, Teresa.1991, p. 194.).

Por ello, en los casos que es político criminalmente satisfactorio que la expropiación a la víctima de "su" conflicto se revierta, cediendo el paso para que primen medios en los cuales la decisión conjunta de víctima y autor sea necesario y suficiente para que el Estado, mediante el Proceso Penal renuncie a intervenir.

En ese sentido, separar el acuerdo reparatorio de la aplicación del principio de oportunidad es lo más aconsejable, para desarrollar verdaderamente medios alternativos de solución de conflictos y en esa medida los eventuales acuerdos víctima-autor, constituirían un expediente idóneo para restaurar el orden alterado y, a la vez, confirmar la seriedad del mensaje dirigido a prevenir delitos.

2.3. MARCO CONCEPTUAL

ACCIÓN PENAL.- Es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la



ley vigente. De esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso judicial. Los orígenes de la acción penal se remontan a los tiempos en que el Estado se hizo acreedor del monopolio del uso de la fuerza; al inaugurar la acción penal, ésta reemplazó a la venganza personal y a la autodefensa, al ser el Estado quien asume la defensa y el resarcimiento de sus ciudadanos.

La acción penal, por lo tanto, supone un ejercicio de poder por parte del Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito cometido contra su persona.

En un sentido filosófico, la acción penal es una de las formas que tiene el Estado para reestablecer la paz social que fue alterada por la comisión de un delito. La promoción de una acción penal puede ser ejercida tanto por el poder estatal como por particulares.

Una vez iniciada una acción penal, su primera etapa consiste en la investigación (la búsqueda de pruebas), la persecución (el ejercicio de la acción ante el tribunal competente) y la acusación (se exige un castigo). Durante el juicio, cada uno de estos pasos es concretado y, en base a la acción, el juez se encarga de dictar la resolución conforme a lo estipulado por las leyes vigentes.

Existen dos tipos de acción penal, la pública y la privada. La primera hace referencia a lo que concierne al ministerio público, sin perjuicio de la participación de la víctima y la segunda le corresponde a la víctima específicamente.

Existe, además, un tipo de acción que recibe la clasificación de acción pública penal a instancia privada que existe cuando el ejercicio de la acción pública depende estrictamente de una instancia privada, en tal situación el



ministerio público debe presentar una instancia para poder representar dicha acción.

Los hechos que pueden perseguirse por la acción privada son las violaciones de la propiedad, la injuria o infamación que afecte a un individuo o la violación de la propiedad industrial.

Por su parte, la instancia privada puede perseguir las vías de hecho, los golpes y heridas que dejen lesiones, las amenazas, los robos sin armas y sin violencia, las estafas y las falsificación de escrituras o documentos, entre otros. En este caso, la acción nace cuando la víctima presenta una denuncia y, a partir de ese momento, se comienza con la persecución de los imputados.

Cuando el hecho punible ha sido llevado a cabo contra un incapaz o un menor por parte de alguno de sus padres o tutores, que serían teóricamente sus representantes, por evidentes razones es el ministerio público el que ejerce la acción.

Existen casos en los que la acción penal puede extinguirse, como cuando fallece el imputado o la víctima (siempre y cuando sus herederos no continúen con la acción), se ofrece la amnistía, se abandona la acusación, se vence el plazo de la suspensión condicional del procedimiento penal o prescripción o desistimiento de la instancia privada (si es que de ella depende la acción pública).

Es importante señalar también que la acción civil puede ejercerse de forma simultánea con la penal, siempre y cuando se respeten las normas pautadas en el código procesal penal. A veces se las trata de forma conjunta y otras, por separado en los tribunales civiles; en este último caso se paraliza el ejercicio hasta que se dicta un veredicto.

ACTAS DE CUMPLIMIENTO.- La palabra "acta" viene del latín y significa "los hechos"; luego, un "acta" no es más que un testimonio escrito de los hechos ocurridos en cualquier circunstancia: una reunión de consorcio, una asamblea de miembros de una comisión directiva de cualquier entidad, una certificación del nacimiento de una persona, etc. Es decir, hechos que se asientan por escrito y que resulta importante registrar y conservar.

Formalmente debe contener datos del lugar donde se "labra" (así se denomina al hecho de redactarla; "labra" viene del latín "labora", "trabaja"), fecha y hora; una breve introducción sobre el hecho a que se refiere o el motivo que da lugar a su escritura y, en el "cuerpo", un detalle pormenorizado de lo que acontece en el acto o reunión. Si hay debates, nómina de los que intervienen y síntesis de lo que dicen, así como las conclusiones a las que se arriban. Si hay votaciones, detalle de lo que se vota y resultado de la votación. Si hay "mociones" (acciones que los presentes proponen), detalle del contenido de cada una y mención de quien la formuló. Para su cierre, se usa generalmente un párrafo "de estilo", indicando la hora en que termina el acto y señalando que al pie firmarán los presentes "prestando su conformidad" a lo actuado.

Las actas son testimonios de hechos ocurridos y suelen escribirse en libros con hojas renglonadas para ello. Además, se las numera correlativamente.

ACUERDOS REPARATORIOS.- Descrita la situación anterior, tenemos dos opciones o nos conformamos con la regulación vigente o nos revelamos ante el engaño planteando soluciones posibles a esta problemática que se presenta.



Como paso previo es fundamental rescatar que si bien la crisis en la administración de justicia ha significado el fracaso del principio de legalidad y la huida a medios alternativos de soluciones de conflictos, ello debe significar acudir a la formulación de criterios de oportunidad en el sentirlo de solo asignarle la tarea de ser un mecanismo efectivo de selección de casos penales (Angulo Arana 2004, p. 15.) sin asignarle la tarea de buscar la solución de conflictos que se presentan y con ello decidir acerca de cuáles conflictos merecen tutela penal sin asignarle una tarea de buscar la solución de estos (Bacigalupo Zapater Justicia Penal. CC. VV. Poder Judicial, p. 14), éste debe ser útil en la medida que permita diferenciar la gravedad de los conflictos que merecen tutela penal y cuáles no, ésta y no otra debe ser su principal función, asignarle una tarea distinta es subvertir su contenido porque es evidente que el principio de oportunidad coopera a la descarga de una administración de justicia que se ve desbordada por el número de causas penales que llegan a su conocimiento (Armenta Deu 1991, p. 194.)

Por ello, en los casos que es político criminalmente satisfactorio que la expropiación a la víctima de "su" conflicto se revierta, cediendo el paso para que primen medios en los cuales la decisión conjunta de víctima y autor sea necesario y suficiente para que el Estado, mediante el Proceso Penal renuncie a intervenir.

En ese sentido, separar el acuerdo reparatorio de la aplicación del principio de oportunidad es lo más aconsejable, para desarrollar verdaderamente medios alternativos de solución de conflictos y en esa medida los eventuales acuerdos víctima-autor, constituirían un expediente idóneo para



restaurar el orden alterado y, a la vez, confirmar la seriedad del mensaje dirigido a prevenir delitos.

DELITO.- Es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley.

En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador debe siempre abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es trabajo de la dogmática.

No obstante, algunos códigos como el Código Penal de España (art. 10) definen al delito, pese a lo dicho.

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal.
(<http://es.wikipedia.org/wiki/Delito>)

Además toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Esta definición está contenida en el artículo 1º del Código Penal. En forma simple,



es la comisión de un hecho que la ley castiga con una cierta pena. Lo que hace característico al delito, es la existencia de una norma jurídica que debe haber sido dictada con anterioridad al hecho, que amenace fija una sanción al que realiza el hecho. Es decir previene la conducta por la amenaza de la sanción, y no por la prohibición. La ley no prohíbe robar, pero sanciona el robo con penas privativas de libertad. Además de la norma previa, el delito contiene una conducta típica, es decir la definición del hecho que la norma quiere impedir. "El empleado público que tenga a su cargo fondos públicos...". Este tipo dice que se aplicará la norma, sólo al empleado público, pero que además tenga a su cargo, es decir bajo su responsabilidad "fondos públicos". Por eso se dice que la conducta normada, debe caber exactamente en el hecho cometido, ya que si no calza perfectamente, no es ese el tipo penal aplicable. (<http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm>)

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO.- El título V del libro II del código penal se refiere a los delitos contra el patrimonio. En otros códigos penales, estos delitos se agrupan en un mismo capítulo bajo la rúbrica de "Delitos contra la propiedad" Nuestro legislador, en el código penal actual, manteniendo la misma rubrica del código penal de 1924, ha sido consiente de todas las dificultades que con lleva el empleo del término "propiedad", en la medida que tal concepto no abarca todos los comportamientos típicos acogidos bajo el título V, de ahí que en la actualidad, tanto en el ámbito penal como en el civil, se utilice en cuanto termino más apropiado el de "patrimonio".

No obstante, el concepto de "patrimonio" tampoco presenta un contenido claro capaz de resolver todos los problemas que plantean estos delitos; es por esto que se ha mantenido diferentes posiciones que tratan de



esclarecer su significado. Sin embargo, no constituye objetivo del presente trabajo, el realizar una exhaustiva de las distintas tesis doctrinales mantenidas al respecto, puesto que nos saldríamos de los límites fijados. De ahí que se expliquen brevemente, y sin perjuicio posteriormente por el exponente. Fundamentalmente, son cuatro tesis planteadas en torno al concepto de "patrimonio".

Concepción jurídica del patrimonio: Según esta teoría son derechos patrimoniales aquellos reconocidos como derechos patrimoniales subjetivos por el derecho privado o público. En la actualidad esta posición ha caído en desuso.

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.- La aplicación del Principio de Oportunidad constituye una decisión determinante en el deber del Estado de brindar una respuesta adecuada a las diferentes expresiones de la criminalidad. Por tratarse de una decisión esencialmente reglada, la aplicación de dicho instituto está determinada por el cumplimiento de requisitos específicos, de acuerdo con las exigencias de cada causal.

El debate sobre la procedencia de la suspensión, interrupción o renuncia al ejercicio de la acción penal no se limita a aspectos meramente jurídicos. En cada caso es fundamental establecer si los presupuestos fácticos de las diferentes normas que resulten aplicables están suficientemente acreditados, como por ejemplo el nivel de daño causado, el perjuicio físico o moral sufrido por el sujeto activo y las circunstancias que atenúan el juicio de reproche de culpabilidad.

Aunque, como es apenas lógico, para la aplicación del Principio de Oportunidad no se exija un nivel de conocimiento tan amplio como el requerido



para proferir una condena sí es necesario que existan bases suficientes para concluir que ha ocurrido una conducta punible y que una o varias personas en particular son autoras o partícipes. A manera de ejemplo, no basta con establecer que ocurrió un accidente de tránsito y que a raíz del mismo una persona resultó muerta o lesionada; es necesario precisar si hubo un comportamiento imprudente atribuible a una persona determinada, si existe relación causal entre dicha imprudencia y el resultado.

SANCIÓN PENAL.- La palabra Sanción Penal en el Derecho tiene varias acepciones así: desde el punto de vista del Derecho Penal, "se entiende por sanción penal a la amenaza legal de un mal por la omisión de ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos", también se entiende se entiende por sanción, al mal que se padece como consecuencia de un error cometido y que puede entenderse como un castigo además también se podría entender a Sanción como la aceptación, tal y como ocurre cuando el Presidente de la República acepta o se allana a una proyecto de Ley procedente del Congreso Nacional o Asamblea Nacional, lo que se denomina "Sanción Presidencial".

En con secuencia y saltándonos la definición de aceptación, entenderíamos que Sanción es un castigo que se aplica a una a persona por haber infringido una Ley. Por otro lado, en el Derecho existen varias clases de sanción de acuerdo con la materia del derecho en que se cometido la infracción así: existen Sanciones Penales Objetivo de la Sanción.

Las "Sanciones son establecidas por el orden jurídico para provocar cierta conducta humana que el legislador considera deseable". Las sanciones jurídicas "tienen carácter de actos coercitivos", es decir una vez dictadas su cumplimiento es obligatorio, originariamente solo se hablaba de un tipo de

sanción "La Penal", esto es el castigo en el sentido estricto de la palabra; es decir en relación con la vida, la Libertad, La propiedad, La Integridad Física, de acuerdo con la materia a la que se refieran las sanciones pueden ser entendidas como penales.

2.4 HIPÓTESIS

2.4.1. Hipótesis de trabajo

Los delitos contra el patrimonio repercuten en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013.

2.4.2. Subhipótesis

En los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en el acta de acuerdo de reparación civil en las víctimas del distrito judicial de Puno.

En las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil se genera el incumplimientos de éstas, en las víctimas del distrito judicial de Puno

No existe relación entre los delitos contra el patrimonio y las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno.

2.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	CRITERIOS DE VALORACIÓN
Variable independiente DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO	1. Hurto 2. Robo 3. Abigeato 4. Apropiación ilícita 5. Receptación 6. Estafa 7. Extorción 8. Daños	- Acción pena Efectividad de la Pena - Sanción Penal Pena privativa	- Se presentan casos. - No se presentan casos
Variable dependiente ACUERDOS REPARATORIOS	2.1. Principio de oportunidad. 2.2. Actas	- Resolución de Conflictos - Acuerdos	- Si cumple - No cumple

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos y relaciones que establece, los resultados obtenidos o nuevos conocimientos y tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad.

Para ello planea una metodología o procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el significado de la investigación, en razón de que constituye un estudio jurídico procesal y retrospectivo, el mismo que está sujeto a reglas metodológicas. Además su objeto es la búsqueda y descubrir los fenómenos de la realidad, parte de la práctica y vuelve a la práctica para mejorarla. Consiguientemente será el método dogmático la que oriente el presente estudio.

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una investigación a nivel explicativo (analítico sustantivo de la normatividad) porque es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse al

problema estudiado, sino que intenta encontrar la repercusión de la misma.
(Charaja C. F: 2011).

El presente estudio de investigación de acuerdo con Roberto Hernández Sampieri y otros, según su perspectiva, sus fines pertenece a un tipo de investigación Básica, que pretende conocer y determinar la repercusión de los acuerdos reparatorios para los delitos contra el patrimonio en los acuerdos reparatorios en las víctimas del distrito judicial de Puno durante el año 2013.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Por la característica del trabajo a realizar se considera, que corresponde a un diseño descriptivo correlacional dado que nuestro propósito es determinar y conocer las restricciones de la aplicabilidad de los acuerdos reparatorios producto del proceso penal de los delitos contra el patrimonio.

Gráficamente se representa así:

Diseño descriptivo:

En el diseño:

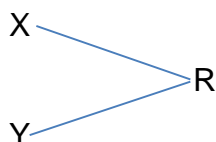
En el diseño:

X → Y

X = observación

Y = instrumento

Diseño correlacional:





x: Variable independiente

y: Variable dependiente

r: Relación de variables

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1. POBLACIÓN.

La investigación ha sido ejecutada geográficamente en la jurisdicción del distrito judicial de Puno año 2013. Para el presente estudio se realizó la explicación de 42 expedientes sobre los casos antes mencionados.

3.3.2. MUESTRA.

Los casos que se han presentado en las diferentes fiscalías de decisión temprana especializadas en lo penal.

Así mismo el estudio está dirigido a magistrados del ministerio público, abogados litigantes para el caso.

Diseño de la Muestra

La muestra seleccionada será el no probabilística porque las unidades de muestreo han sido seleccionadas mediante métodos aleatorios que permitieron efectuar inferencia estadística a la población en base a la teoría de probabilidades. Además es auto ponderado porque la probabilidad de selección es la misma para cada una de las unidades de análisis seleccionadas.

Determinación del tamaño de la muestra

Considerando que la población se refiere a la totalidad de elementos, los cuales conforman un grupo llamado universo y estos presentan características de interés al tema estudiado.

En consecuencia se tomó como población a la totalidad de los diferentes casos que se presenten en los diferentes fiscalías; motivo del presente estudio. Específicamente la muestra está constituida por el 40% de la población (casos).

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

3.4.1. TÉCNICAS.

Para la presente investigación se utilizó las técnicas más típicas y que son aplicables a la ciencia del Derecho y los mismos que me servirán para la obtención, registro y análisis de los datos.

LA OBSERVACION.- Se utilizó para extraer información sobre el problema planteado.

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTARIO.- con la finalidad de obtención de la información respecto a la legislación, doctrina y jurisprudencia relacionada con el problema materia de estudio.

ENCUESTA.- para conocer de cerca los pormenores que se detallen en el presente estudio, específicamente para fortalecer la variable independiente formulada, así mismo todos los aspectos que se relacionan con la aplicación de los acuerdos reparatorios en el distrito judicial de puno año 2012.

ANÁLISIS O REVISIÓN DE EXPEDIENTE.- respecto de los casos que se presenten en las diferentes dependencias y oficinas del Ministerio Público.

3.4.2. INSTRUMENTOS

Ficha textual. Bibliográfica y de resumen.

Matriz para el cotejo de expediente.

3.4.3. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

A) DISEÑO ESTADÍSTICO.

Uso de cuadros estadísticos de distribución de frecuencias, para agrupar datos que se obtuvieron.

Luego de realizado el trabajo de campo y concluido la aplicación de los instrumentos, se seleccionó la respuesta de acuerdo a los objetivos y variables formuladas.

Se utilizó la Matriz Tripartita de Datos, en estos instrumentos se almacenaron provisionalmente la información obtenida y que previamente ha sido seleccionada o representada por el investigador, y la información clasificada y almacenada en la Matriz de Datos, se ha trasladado a un procesador de sistema computarizado, el mismo que nos permitió utilizar las técnicas estadística apropiadas, teniendo en cuenta el Diseño formulado.

Gráficos como: Histogramas, polígonos de frecuencias; barras simples.

3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS:

De acuerdo al tipo de investigación en el presente estudio y la población; se utilizó el estadístico de prueba denominado: PRUEBA CHI CUADRADO:

a) Planteamiento de las Hipótesis:

H_0 : La medida en que los delitos contra el patrimonio en los acuerdos reparatorios de las víctimas del Distrito Judicial de Puno año 2013 NO repercuten en la falta de cumplimiento efectivo independencia y preparación de los órganos que aplican. Son iguales.

$$P1 = P2 = P3 = \dots = Pn$$

H_a : La medida en que los delitos contra el patrimonio en los acuerdos reparatorios de las víctimas del distrito judicial de puno año 2013 SI repercuten en la falta de cumplimiento efectivo independencia y preparación de los órganos que aplican.

Son diferentes.

$$P1 \neq P2 \neq P3 \neq \dots \neq Pn$$

b) La prueba es bilateral y de dos colas.

c) Nivel de significación:

$$\alpha = 0,05 \text{ (5\%)}$$

d) Prueba estadística:

Para el presente caso se aplicó el estadístico Chi cuadrada.

e) Calculo del estadístico de prueba.

f) Decisión:

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1. GENERALIDADES

El presente estudio tiene como propósito determinar los delitos contra el patrimonio repercute en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno.

Para tal fin daremos a conocer los reportes según las variables de estudio en este caso; los delitos contra el patrimonio, que se presenta en cuadros y gráficos; seguido de la variable, características de los acuerdos para el pago de reparación.

Una vez concluida este reporte se pasó a correlacionar ambas variables en estudio con el diseño estadístico de prueba la Chi cuadrado para observar la significancia de ambos variables y notar su dependencia o independencia.

Pasaremos a comprobar la hipótesis planteada, según los resultados alcanzados de ambas variables de estudio y llegar a una conclusión coherente de nuestra investigación realizada.

4.2. REPORTE DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

El reporte de los delitos contra el patrimonio se realizó considerando las dimensiones de la variable como son; Hurto, robo, abigeato, apropiación ilícita, receptación, estafa, extorción y daños, los que constituyen la variable en estudio. En una primera instancia el primer cuadro general refleja el total de los delitos contra el patrimonio, seguidos de los cuadros que se presenta por dimensiones y notar las diferentes diferencias y las escalas más altas de los delitos.

4.3. RESULTADO DE LA VARIABLES DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Este reporte es fruto del promedio de las dimensiones que se presentan posteriores a esta tabla general.

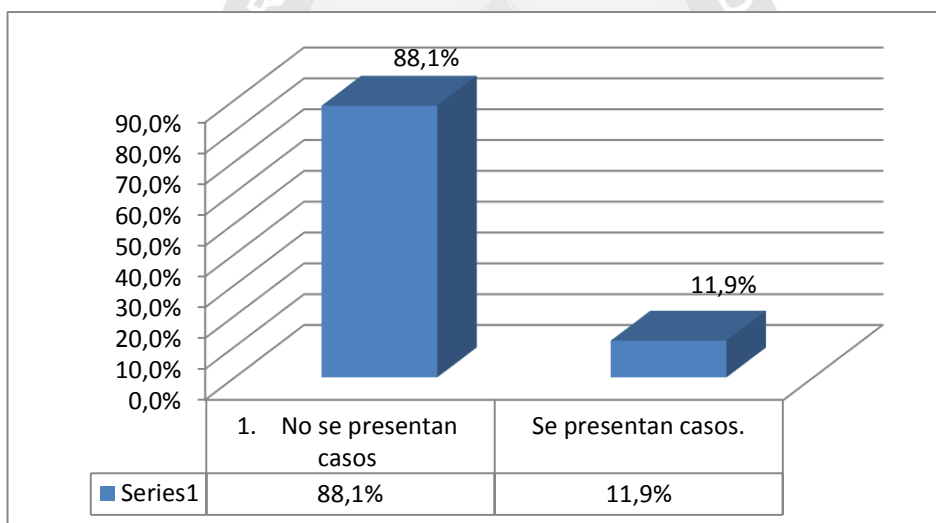
TABLA N° 01
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. No se presentan casos	37	88.10
2. Se presentan casos.	05	11.90
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, tablas del N° 02 al 09.

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 01
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, tablas del N° 02 al 09.

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

De la tabla se desprende el 88.10% que representa a 37 expedientes, de los cuales no se presentaron casos de delito contra el patrimonio en las víctimas del distrito Judicial de Puno; por otro lado, el 11.9% que es igual a 05 expedientes se observa que presentan casos de delitos contra el patrimonio en las víctimas.



En suma más del 11% del total de los expedientes presentan casos de delitos contra el patrimonio, dentro de la concepción económica estricta del patrimonio, el patrimonio está constituido por la suma de valores económicos pertenecientes a una persona, sin importar que estos gocen de reconocimiento jurídico. No obstante, esta posición por su visión puramente objetiva, no da importancia a las circunstancias de cada caso individual - importancia personal del bien, y por ser tan amplia, la concepción de patrimonio abarcaría incluso aquellos bienes poseídos antijurídicamente. Considerando el delitos de enriquecimiento; son aquellos en que el sujeto activo busca una determinada ventaja patrimonial –hurto, estafa, apropiación ilícita-, pudiendo llevar a cabo la obtención de tal ventaja a través de diferentes modalidades que, fundamentalmente, son de apoderamiento (hurto, robo) o de defraudación (donde se pone el acento en una determinada relación entre sujeto activo y pasivo) Lo distintivo es el ánimo de lucro indefinido con el enriquecimiento y el delitos sin enriquecimiento; son aquellos en el que el sujeto activo solo persigue un perjuicio del sujeto pasivo (daños).

Por otro lado, según el objeto material sobre el que recae el comportamiento típico; recae en el delitos solo sobre bienes muebles, hurto, robo, apropiación ilícita, receptación; y el delitos que recaen solo sobre bienes inmuebles, usurpación y por último el delitos que recaen sobre bienes muebles e inmuebles, estafa, extorsión, daños.

4.4. RESULTADO DE LA VARIABLES DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO SEGÚN DIMENSIONES.

Dicho reporte se efectuó considerando las dimensiones que se han planteado con anterioridad en la operacionalización de variables los que son; hurto, robo, abigeato, apropiación ilícita, receptación, estafa, extorsión y daños, en las víctimas del distrito judicial de Puno.

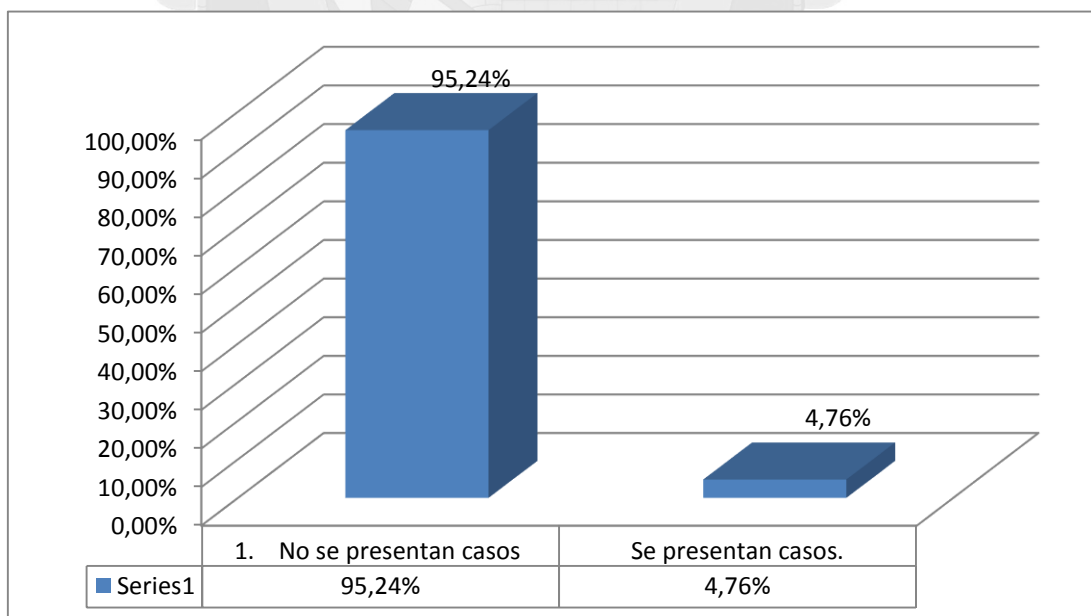
TABLA N° 02
HURTO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. No se presentan casos	40	95.24
2. Se presentan casos.	02	4.76
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 02.

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 02
HURTO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 02.

Elaboración: El Autor.



INTERPRETACIÓN

De la tabla se desprende el 95.24% que representa a 40 expediente no se presentan casos de hurto en las víctimas del distrito judicial de Puno; sin embargo, el 4.76% de 02 expedientes existen casos de hurto en las víctimas del distrito judicial de Puno.

En el delito de hurto existe un porcentaje mínimo debido que sustrajeron un bien inmueble ajeno con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve...
(Código Penal, Art, 187, 2008; 166)

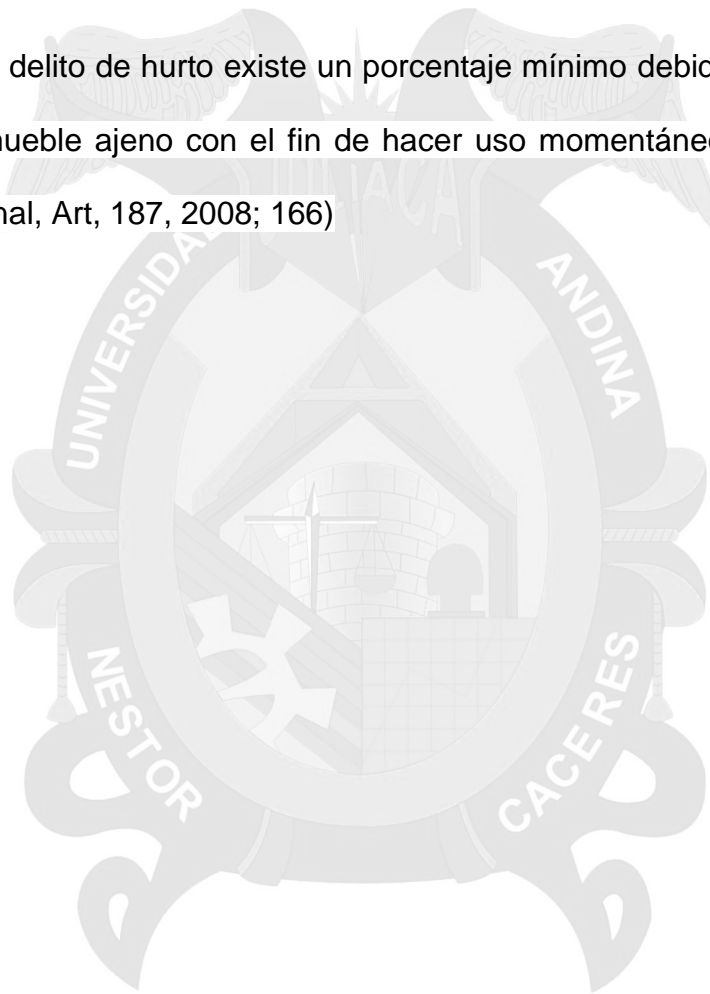


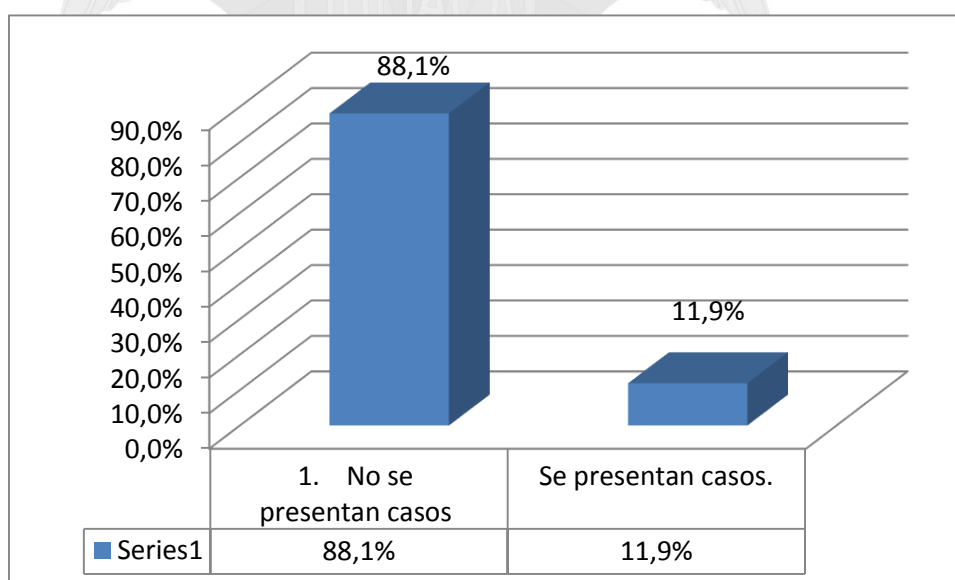
TABLA N° 03
ROBO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. No se presentan casos	37	88.10
2. Se presentan casos.	05	11.90
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 02

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 03
ROBO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 02

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

De la tabla se desprende el 88.10% que representa a 37 expedientes no se presentan casos de robos en las víctimas del distrito judicial de Puno; sin embargo, el 11.90% de 05 expedientes existen casos de robo en las víctimas del distrito judicial de Puno.



En el delito de robo existe un porcentaje mínimo que contiene este caso, debido que se apoderaron legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse del él, sustrayendo en el lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. (Código Penal, Art, 188, 2008; 170)



TABLA N° 04

ABIGEATO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

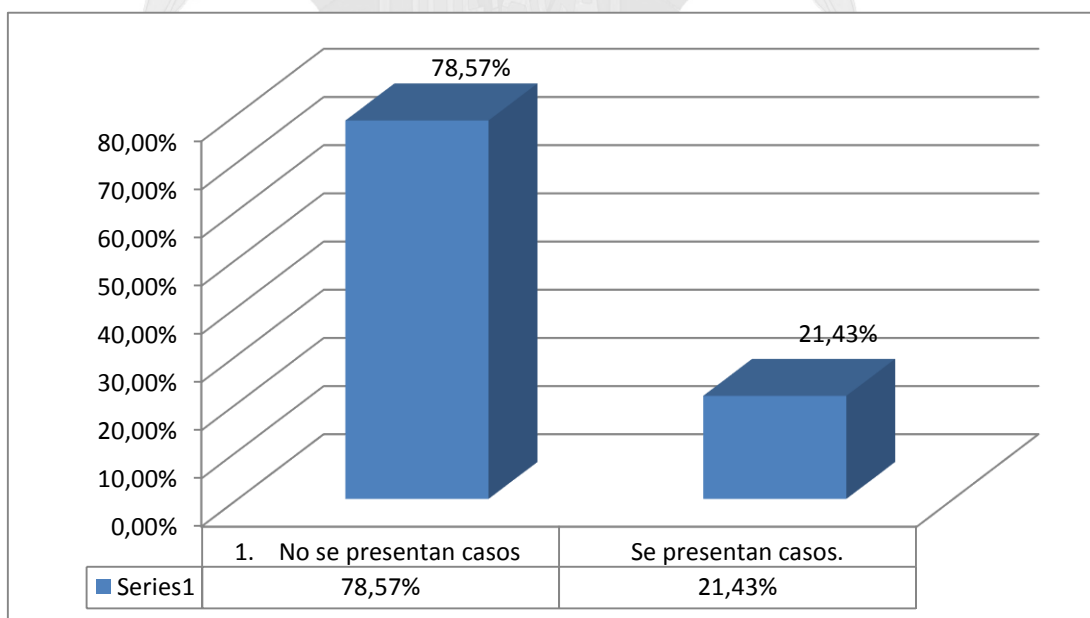
Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. No se presentan casos	33	78.57
2. Se presentan casos.	09	21.43
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 03

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 04

ABIGEATO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 03

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

En el delito de abigeato el 78.57% que es igual a 33 expedientes no se presentan casos de abigeato en las víctimas del distrito judicial de Puno; en contraposición, el 21.43% de 09 expedientes existen casos de abigeato en las víctimas del distrito judicial de Puno.

En suma, más del 20% de expediente existe el delito de abigeato los que para obtener provechos, se apodera ilegítimamente de ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido, total o parcialmente ajeno, aunque se trate de un solo animal, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra... (Código Penal, Art, 189-A, 2008; 170)

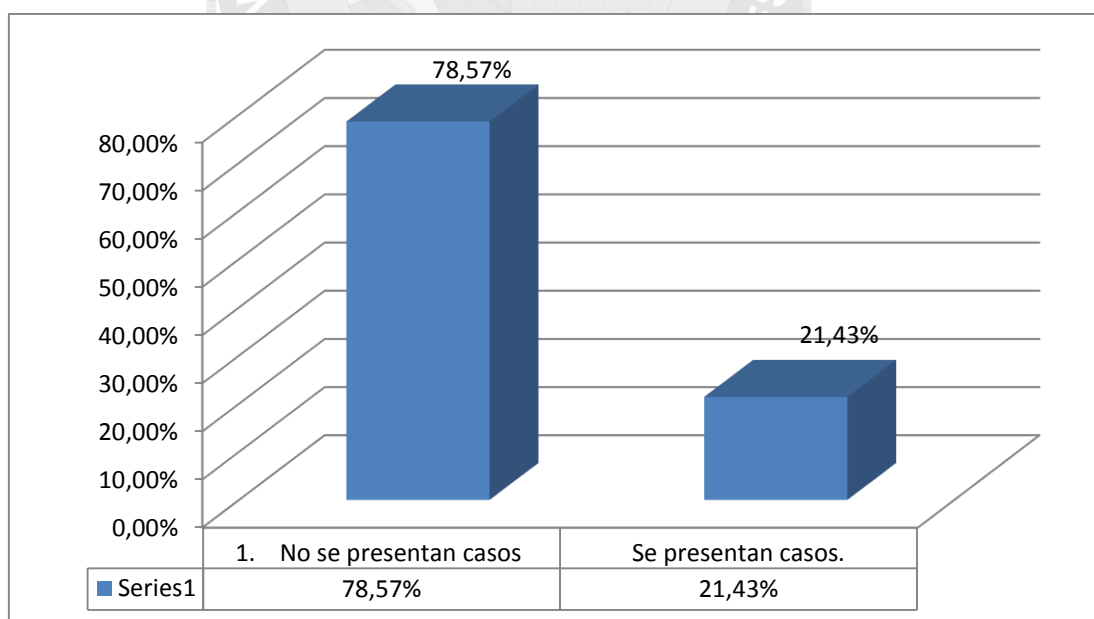
TABLA N° 05
APROPIACIÓN ILÍCITA EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
3. No se presentan casos	33	78.57
4. Se presentan casos.	09	21.43
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 04

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 05
APROPIACIÓN ILÍCITA EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 04

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

Respecto al patrimonio de apropiación, el 78.57% que corresponde 33 expedientes observados no se presentan casos de apropiación ilícita en las víctimas del distrito Judicial de Puno; de otro lado, el 21.43% que es igual a 09 expedientes analizados se observa que presentan casos de apropiación ilícita en las víctimas del distrito Judicial de Puno.

En suma, en más del 20% de expedientes existe apropiación ilícita según en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregas, devolver o hacer un uso determinado... (Código Penal, Art, 190, 2008; 170)

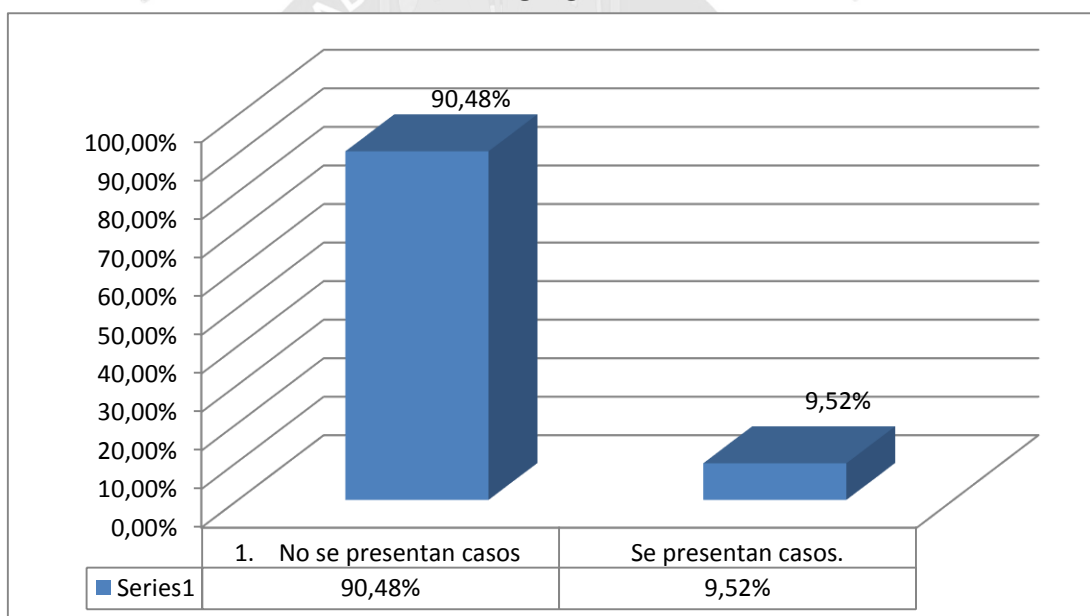
TABLA N° 06
RECEPTACIÓN ILÍCITA EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. No se presentan casos	38	90.48
2. Se presentan casos.	04	9.52
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 05

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 06
RECEPTACIÓN ILÍCITA EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 05

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

Respecto a receptación, se observa en la tabla que el 90.48% que es igual a 38 expedientes no se presentan casos de receptación ilícita en las víctimas del distrito Judicial de Puno; por el contrario, el 9.52% de 04 expedientes se presenta casos de receptación ilícita.

En suma, más del 9% de expedientes presentan casos de receptación, los que han adquirido, reciben donaciones en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. (Código Penal, Art, 194, 2008; 170)

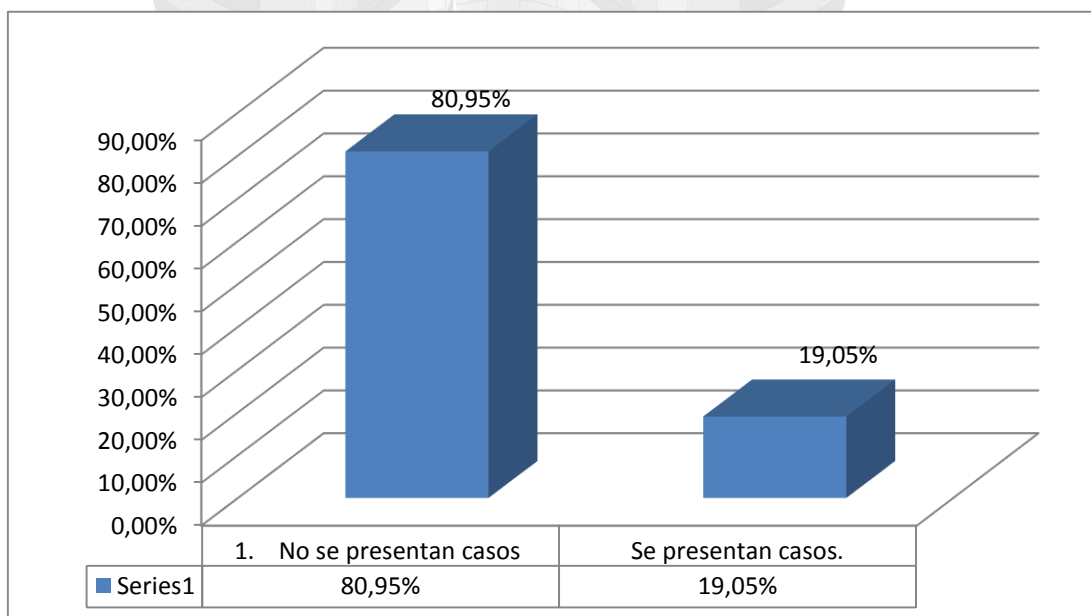
TABLA N° 07
ESTAFA EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. No se presentan casos	34	80.95
2. Se presentan casos.	08	19.05
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 06

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 07
ESTAFA EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 06

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

En el caso de estafa, se aprecia el 80.95% en correspondencia a 34 expedientes no se presentan casos de estafa en las víctimas del distrito Judicial de Puno; el 19.05% que corresponde a 08 expedientes presentan casos de estafa en las víctimas.

En suma, el 19% de expedientes presenta casos de estafa, las víctimas que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado, mediante engaño, astucia, ardid, u otra forma fraudulenta... (Código Penal, Art, 196, 2008; 180)

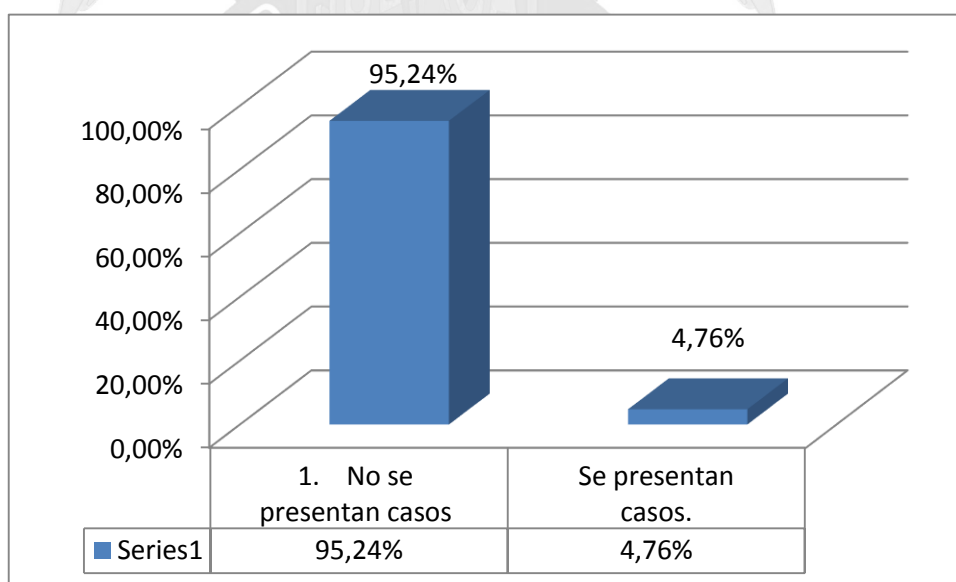
TABLA N° 08
EXTORCIÓN EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. No se presentan casos	40	95.24
2. Se presentan casos.	02	4.76
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 07

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 08
EXTORCIÓN EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 07

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

En el caso de extorsión, el 95.24% que corresponde a 40 expedientes no se presentan casos de extorsión en las víctimas del distrito Judicial de Puno; por otro lado, el 4,76% que representa a 02 expedientes presentan casos de extorsión en las víctimas.

En resumen, un poco más del 4% de los expedientes existen extorsión en las víctimas, mediante violencia o amenazas obligan a una persona o a una

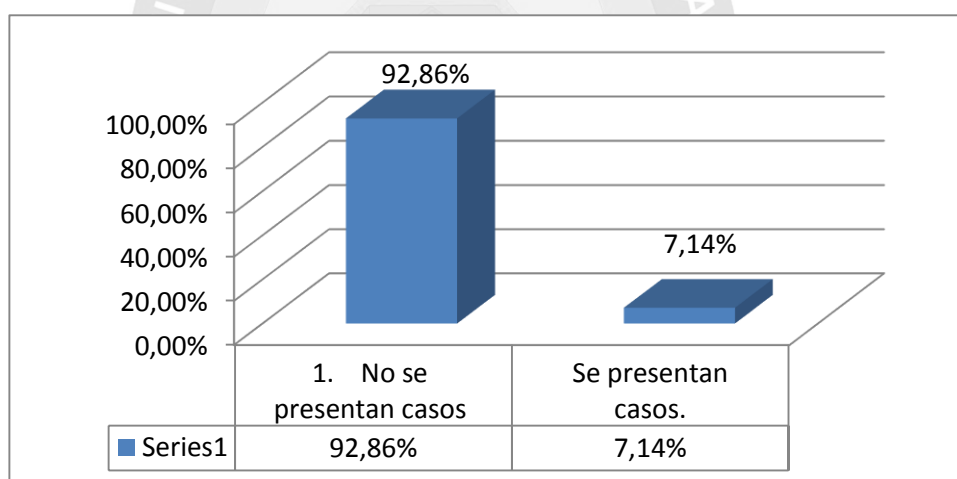
institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole... (Código Penal, Art, 200, 2008; 186)

TABLA N° 09
DAÑO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. No se presentan casos.	39	92.86
2. Se presentan casos.	03	7.14
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 08
Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 09
DAÑO EN LAS VÍCTIMAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 01, Ítem N° 08
Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

De la tabla se desprende que el 92.86% que es igual a 39 expedientes no se presentan casos de daño en las víctimas del distrito Judicial de Puno, sin embargo, el 7.14% en relación a 03 expedientes presentan casos de daños en las víctimas.

En resumen, en el 7% de expedientes existen casos de daños en las víctimas, que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días – multa.

4.5. RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUERDOS PARA EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL

Los resultados de las características de los acuerdos para el proceso de pagos de la reparación civil se efectúan considerando el principio de oportunidad para la resolución de conflictos y los acuerdo en actas. Los que se presentan a continuación:

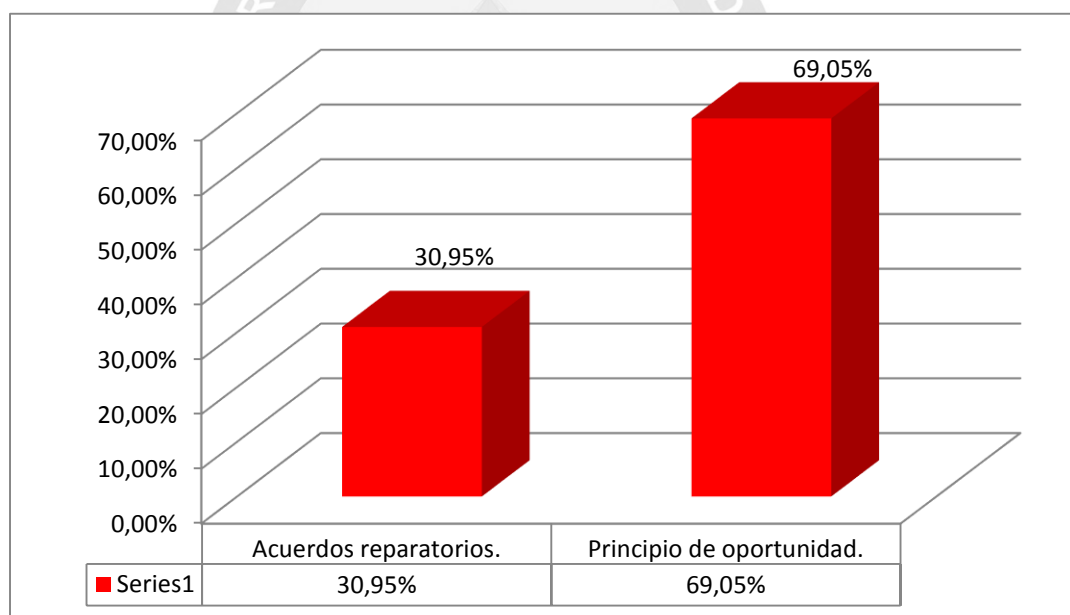
TABLA N° 10
PROCEDIMIENTOS REPARATORIOS Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
RESUELTOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
1. Acuerdos reparatorios.	13	30.95
2. Principio de oportunidad.	29	69.05
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 02.

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 10
PROCEDIMIENTOS REPARATORIOS Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
RESUELTOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 02.

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

En la tabla se presentan los procedimientos reparatorios y principios de oportunidad; se observa que el 69.05% que corresponde a 29 expedientes que presenta el principio de oportunidad.

Por otro lado, el 30.95% que es igual a 13 expedientes existe acuerdos reparatorios en las víctimas del distrito Judicial de Puno.

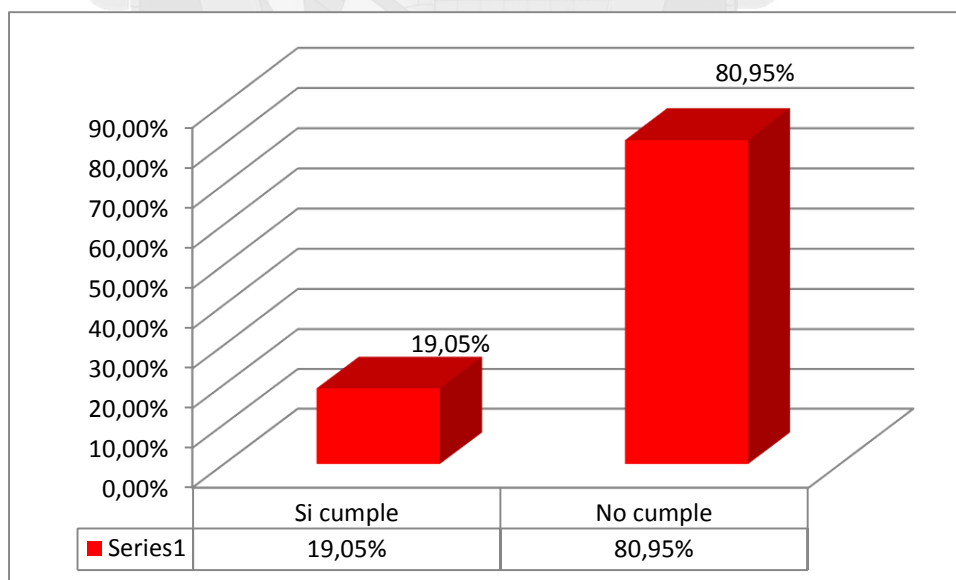
4.6. RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUERDOS PARA EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL POR DIMENSIONES.

TABLA N° 11
ACUERDOS REPARATORIOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
Si cumple	08	19.05
No cumple	34	80.95
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 02
Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 11
ACUERDOS REPARATORIOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 02
Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

En los acuerdos reparatorios se observa en la tabla, el 80.95% que constituye a 34 expedientes no cumplen los acuerdos reparatorios en el distrito judicial de Puno; si consideramos el 19.05% que constituye a 08 expedientes sí cumplen con los acuerdos de reparación a las víctimas.

En suma, más del 80% de los expedientes no existe acuerdos de reparación. El proceso reparator se caracteriza por su carácter informal y por estar basado en el diálogo entre las partes. Con todo, no es la falta de formalidad lo que lo caracteriza sino que tal dato permite en su caso distinguirlo de procedimientos altamente formalizados como es el proceso penal convencional. Los procesos RESTAURATIVOS pueden de hecho regirse por ciertas reglas y existe en los mismos cierta lógica procedimental. Su caracterización en positivo debe efectuarse con base en tres notas: a) el protagonismo y la participación de las partes en la expresión de sus necesidades y la adopción de compromisos; b) la facilitación de un diálogo ordenado pero con contenido emocional; c) la aspiración de hallar una solución asumida por todas las partes en la que se establezcan las condiciones de la situación que debe suceder al conflicto.

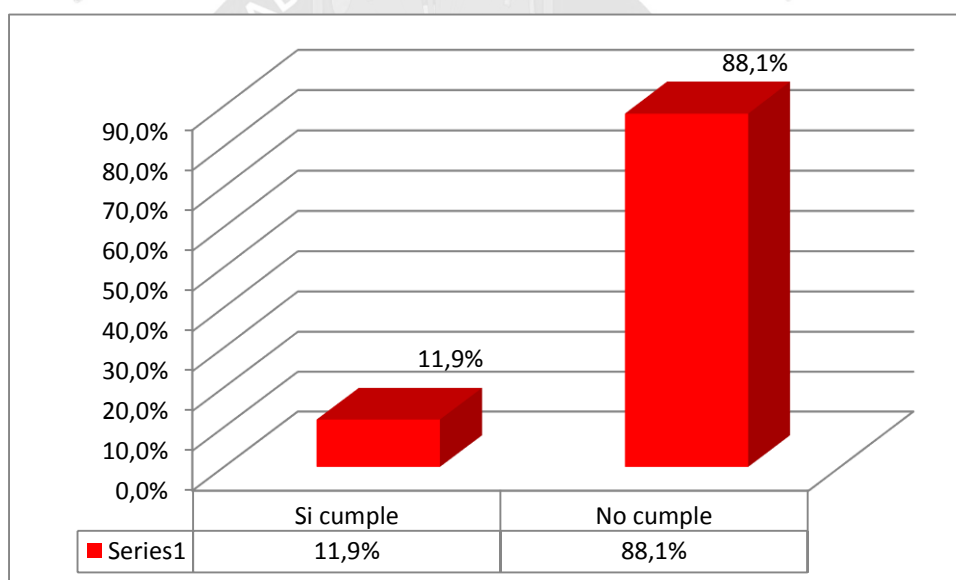
TABLA N° 12
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO

Criterios de Valoración	f _i	Porcentaje
Si cumple	05	11.90
No cumple	37	88.10
TOTAL	42	100%

Fuente: Análisis documental ver anexo N° 02

Elaboración: El Autor.

GRÁFICO N° 12
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO



Fuente: Análisis documental ver anexo N° 02

Elaboración: El Autor.

INTERPRETACIÓN

De la tabla se desprende el 88.10% en correspondencia a 37 expedientes que no cumplen con el principio de oportunidad en el distrito Judicial de Puno; el 11.90% en relación a 05 expedientes que sí cumplen el principio de oportunidad.

En resumen, más del 88% de expedientes no cumplen el principio de oportunidad, La aplicación del Principio de Oportunidad constituye una decisión determinante en el deber del Estado de brindar una respuesta adecuada a las diferentes expresiones de la criminalidad. Por tratarse de una decisión esencialmente reglada, la aplicación de dicho instituto está determinada por el cumplimiento de requisitos específicos, de acuerdo con las exigencias de cada causal.

El debate sobre la procedencia de la suspensión, interrupción o renuncia al ejercicio de la acción penal no se limita a aspectos meramente jurídicos. En cada caso es fundamental establecer si los presupuestos fácticos de las diferentes normas que resulten aplicables están suficientemente acreditados, como por ejemplo el nivel de daño causado, el perjuicio físico o moral sufrido por el sujeto activo y las circunstancias que atenúan el juicio de reproche de culpabilidad.

Aunque, como es apenas lógico, para la aplicación del Principio de Oportunidad no se exija un nivel de conocimiento tan amplio como el requerido para proferir una condena sí es necesario que existan bases suficientes para concluir que ha ocurrido una conducta punible y que una o varias personas en particular son autoras o partícipes. A manera de ejemplo, no basta con establecer que ocurrió un accidente de tránsito y que a raíz del mismo una persona resultó muerta o lesionada; es necesario precisar si hubo un comportamiento imprudente atribuible a una persona determinada, si existe relación causal entre dicha imprudencia y el resultado.

4.7. RELACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUERDOS

La relación que a continuación se presenta son el fruto de los resultados de las dos variables motivo de estudio: delitos contra el patrimonio y las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno.

Esta prueba es utilizada para los análisis de la relación entre dos variables, la prueba se calcula mediante la utilización de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, el que se caracteriza porque consta de dos dimensiones; los que corresponden a una variable; a las frecuencias observadas de cada variable en la comparación de la tabla de frecuencia esperada, para observar su significancia.

Para tal fin recurriremos al estadístico de prueba de la Chi Cuadrado, con 01 grados de libertad y 0.05 grados de significancia o de confianza, haciendo uso del paquete estadístico del SPSS v. 19.

TABLA N° 13

TABLA DE CONTINGENCIA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES

			ACUERDOS REPARATORIOS		Total
			Acuerdos Reparatorios	Principio de Oportunidad	
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO	No se Presentan Casos	Recuento	0	13	13
		Frecuencia esperada	1,5	11,5	13,0
	Se Presentan Casos	Recuento	5	24	29
		Frecuencia esperada	3,5	25,5	29,0
Total		Recuento	5	37	42
		Frecuencia esperada	5,0	37,0	42,0

En el cuadro se observa la frecuencia observada de las dos variables en estudio, para luego dar a conocer la frecuencia esperada que pide la fórmula de la chi cuadrada, en el cuadro que a continuación se presente la frecuencia esperada para luego reemplaza la fórmula planteada.

TABLA N° 14

ESTADISTICO DE PRUEBA CHI CUADRADO

Estadísticos	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	2,544	1	,111
Corrección por continuidad	1,166	1	,280
Razón de verosimilitudes	4,000	1	,046
N de casos válidos	42		

Por último, la Chi – Cuadrada (X^2) calcularemos con la fórmula planteada; es decir para cada celda se calcula la diferencia entre las

frecuencias observadas y esperadas, se eleva al cuadrado y se divide entre las frecuencias esperadas. La suma de todas las celdas es la Chi – Cuadrada calculada.

Tal como se puede apreciar en la tabla, el valor de la Chi Cuadrada es de 2,544 para interpretar el resultado obtenido debemos utilizar el concepto de grados de libertad (GI), el cual se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$GI = (r - 1) (c - 1)$$

En la que:

r = número de filas

c = número de columnas.

Por lo que:

$$GI = (2 - 1) (2 - 1) = 1$$

Luego de realizados los cálculos, debemos comparar en la tabla de Distribución de la Chi Cuadrado, eligiendo el nivel de confianza 0,05, con 01 grados de libertad que es de 3,84 el valor corresponde a los grados de libertad obtenidos. Si el valor calculado es igual o superior al de la tabla, esto quiere decir que las variables están relacionadas. Asumiendo el valor de al nivel de confianza de 0.05 con 01 grados de libertad, la chi tabulada es de 2,544. No existe relación

PRUEBA DE HIPÓTESIS

Para la prueba de hipótesis se recurrirá a la hipótesis central que es la hipótesis que se desea probar; la primera hipótesis es la hipótesis alterna y la segunda es la hipótesis nula.

1.- Hipótesis general

H_0 : Los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013.

H_a . Los delitos contra el patrimonio, los fiscales establecen las medidas preventivas en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013.

Decisión

La relación de las variables logrado según el estadístico de prueba de la Chi Cuadrado se logra 2,544 asumiendo el nivel de confianza de 0,05, por el contrario el valor de la Chi Cuadrado con 1 grados de libertad al nivel de 0.05 es de 3,84. Como el valor de la Chi cuadrado tabulado es superior en 3,84, por el contrario el valor de la Chi cuadrado calculado es de 2,544 que es inferior a la Chi cuadrado tabulado con 1 grados de libertad y el nivel de confianza de 0.05, se asume la hipótesis nula, entonces; los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013.

A. Primera Prueba de hipótesis específicas

H_a : En los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en el acta de acuerdo de reparación civil en las víctimas del distrito judicial de Puno.

H_o : En los delitos contra el patrimonio, los fiscales establecen las medidas preventivas en el acta de acuerdo de reparación civil en las víctimas del distrito judicial de Puno.

2) Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$ ó $\alpha = 0.01$

3) Distribución Muestral.

$$X_c^2 = \sum_{i=1}^K \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} \approx X_{(K-1)=Gl}^2$$

o_i : Frecuencia Observada.

e_i : Frecuencia Esperada.

$$\Rightarrow e_i = \frac{n}{K} = \frac{42}{2} = 21$$

4) Cálculo del Estadístico de Prueba

$$X_c^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} = \frac{(5 - 21)^2}{37} + \frac{(37 - 21)^2}{37} = 24.38$$

Se busca en la tabla de X^2 , el valor tabular con $K-1$ grados de libertad y $\alpha = 0.05$ ó $\alpha = 0.01$. Se tiene, $K = 2 \Rightarrow K - 1 = 1$, grados de libertad.

$$X_{1,0.05}^2 = 3.84$$

5) $X_{1,0.01}^2 = 6.63$ **Toma de Decisión:** Como,

$$X_c^2 = 24.38 < X_{1,0.01}^2 = 6.63$$

Se observa que la Chi cuadrado calculado es de 24.38, que es superior al de la valor crítico de la Chi cuadrado tabular en 6.63, entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, en los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en el acta de acuerdo de reparación civil en las víctimas del distrito judicial de Puno.

B. Segunda Prueba de hipótesis específicas

H_a: En las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil se genera el incumplimientos de éstas, en las víctimas del distrito judicial de Puno.

H₀: En las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil se genera el cumplimiento de éstas, en las víctimas del distrito judicial de Puno.

2) Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$ ó $\alpha = 0.01$

3) Distribución Muestral.

$$X_c^2 = \sum_{i=1}^K \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} \approx X_{(K-1)=Gf}^2$$

o_i : Frecuencia Observada.

e_i : Frecuencia Esperada.

$$\Rightarrow e_i = \frac{n}{K} = \frac{42}{2} = 21$$

4) Cálculo del Estadístico de Prueba

$$X_c^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} = \frac{(13 - 21)^2}{21} + \frac{(29 - 21)^2}{21} = 6.08$$

Se busca en la tabla de X^2 , el valor tabular con $K-1$ grados de libertad y $\alpha = 0.05$ ó $\alpha = 0.01$. Se tiene, $K = 2 \Rightarrow K - 1 = 1$, grados de libertad.

$$X_{1,0.05}^2 = 3.84$$

5) Toma de Decisión: Como,

$$X_c^2 = 6.08 > X_{1,0.05}^2 = 3.84$$

Se observa que la Chi cuadrado calculado es de 6.08, que es superior al valor crítico de la Chi cuadrado tabular en 3.84, entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil se genera el incumplimientos de éstas, en las víctimas del distrito judicial de Puno.

4.8. DISCUSIÓN

En el presente estudio se ha llegado a concluir que los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013. Según el estadístico de prueba de la Chi Cuadrado Calculada se logra el 2,544 asumiendo el nivel de confianza de 0,05, por el contrario el valor de la Chi Cuadrado con 1 grados de libertad al nivel de 0.05 es de 3,84. Como el valor de la Chi cuadrado tabulado es superior en 3,84, por el contrario el valor de la Chi cuadrado calculado es de 2,544 se dice que ambas variables son independientes, según

CONCLUSIONES

PRIMERA: En los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil, en las víctimas del distrito judicial de Puno, 2013, es así que la relación de las variables logrado según el estadístico de prueba de la Chi Cuadrado Calculado es de 2,544 que es inferior al valor crítico de la Chi Calculado tabular en 3.84 asumiendo el nivel de confianza de 0,05, con 1 grado de libertad. Es así que los delitos contra el patrimonio son altamente independientes a la variable de las medidas preventivas de las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil.

SEGUNDA: En los delitos contra el patrimonio, los fiscales no establecen las medidas preventivas en el acta de acuerdo de reparación civil en las víctimas del distrito judicial de Puno. Se observa que la Chi cuadrado Calculado es de 24.38, que es superior al de la valor crítico de la Chi cuadrado Tabular en 6.63. Del mismo se observa que el 88.10% que representa a 37 expedientes, de los cuales no se presentaron casos de delito contra el patrimonio en las víctimas del distrito Judicial de Puno; por otro lado, el 11.9% que es igual a 05 expedientes se observa que presentan casos de delitos contra el patrimonio en las víctimas.

TERCERA: En las características de los acuerdos para el pago de la reparación civil se genera el incumplimientos de éstas, en las víctimas del distrito judicial de Puno. Se observa que la Chi cuadrado calculado es de 6.08, que es superior al valor crítico de la Chi cuadrado tabular en 3.84, así mismo se observa en los procedimientos reparatorios y principios de oportunidad que el 69.05% que corresponde a 29 expedientes presenta el principio de



oportunidad, por otro lado, el 30.95% que es igual a 13 expedientes existe acuerdos reparatorios en las víctimas del distrito Judicial de Puno.





SUGERENCIAS

PRIMERA: Se sugiere que a través de las Fiscalías Penales se tomen las providencias del caso a fin de poder garantizar el cumplimiento de la Reparación Civil.

SEGUNDA: Se sugiere que el Estado Peruano a través de los plenos puedan legislar en favor del cumplimiento de la Reparación Civil.





REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁNGULO ARANA, Pedro Miguel (2004) El Principio de Oportunidad. Serie Derechos y Garantías. Editorial Palestra. Lima.
- ARIAS DUQUE, Juan Carlos (2006) El Proceso penal Acusatorio Colombiano. Tomo III. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Bogotá Colombia.
- BERNAL CUELLAR, Jaime (2004) El Proceso Penal. Fundamentos Constitucionales del Sistema Acusatorio. Impresión de la Universidad Externado de Colombia. 5ta. Edición Bogotá Colombia.
- BINDER, Alberto M. (2005) Introducción al Derecho Procesal Penal. 2da edición. Editorial Ad - Hoc. Buenos Aires Argentina.
- BINDER, Alberto M (2004) Justicia Penal y Estado de Derecho. 2da edición. Editorial Ad - Hoc. Buenos Aires Argentina.
- CARO JOHN, J. A. (2007). Diccionario de Jurisprudencia Penal: Definiciones y Conceptos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal extraídos de la Jurisprudencia. Grijley. pp. 239–240
- CÓDIGO PENAL. (2008) Delito contra el patrimonio. Juristas editores, 1ra Edic. EIRL. Trujillo.
- ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Juan (2008) Acto Jurídico Negocial. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Abril.
- CHÁMAME ORBE, Raúl (2000) Constitución Didáctica 93. Editorial San Marcos. Quinta Reimpresión. Edición Especial.
- CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2006) El Proceso Penal. Teoría y Jurisprudencia Constitucional. 6ta Edición. Editorial palestra. Lima.

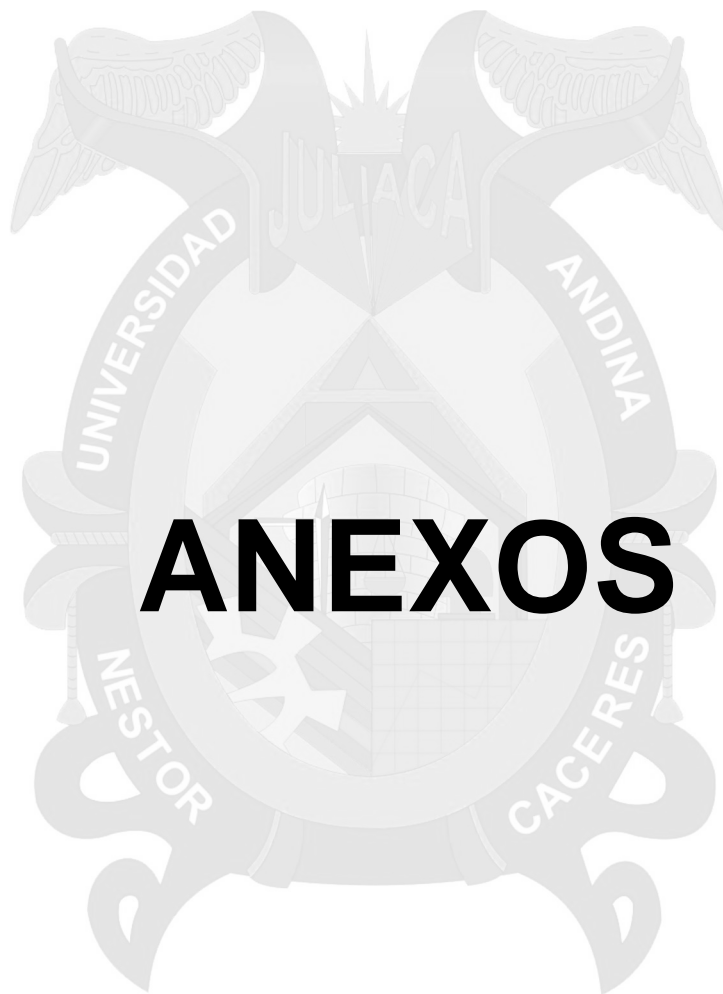


- DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2006) Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la Reforma de la Justicia en el Perú. Informe No 109. Lima Perú.
- GIMENO SEÑORA, Vicente (2006) El Ministerio Fiscal - Director de la Instrucción. 1ra. Edición Madrid, España.
- GÓMEZ O. José Alejandro (2008) Nuevo Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Señal Editora. Primera Edición, Bogotá. Colombia.
- HORVITZ LENNON, María (2005) Derecho Procesal Penal. Chileno Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile, Chile.
- HURTADO POMA, Juan Rolando (2008) Ensayos Jurídicos Contemporáneos. Ara Editores. Lima.
- HURTADO POMA, Juan Rolando (2004) Selección de Lecturas. Instituto de Ciencia Procesal Penal y la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
- JOACHIM LAMPE, Ernst (2003) La Dogmática jurídico penal entre la ontología social y el funcionalismo. Editora Jurídica Grijley. Lima Perú.
- STIPPEL, Jorg (2002) Principio de Oportunidad y Salidas Alternativas al Juicio Oral en América Latina. Editorial Ad - Hoc., Buenos Aires - Argentina.
- MINISTERIO DE JUSTICIA (2004) Dirección de Asuntos Jurídicos. Código Procesal Penal. Primera Edición oficial. Editora Perú. Lima.
- MIXAN MASS, Florencio (2007) Teoría y Práctica para la Reforma Procesal Penal. Primera Edición. Ediciones BLG. Trujillo Perú.
- MONTERO AROCA, Juan (2008) Proceso Penal y Libertad. Primera Edición Thomson. Civitas. Pamplona, España.
- ORE GUARDIA Arsenio (1994) La Reforma del Proceso Penal. Revista IUS



ET VERITAS de la PUC. Pag. 118. Lima.

- ORMAECHEA CHOQUE, Iván (2000) "Manual de Conciliación Procesal y Pre Procesal". Revista No 3. Academia de la Magistratura. Lima.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alfonso Raúl (2007) Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal. Editorial Rodhas. 1ra Edición. Lima.
- PEÑA CABRERA, Raúl (1993) "Trato de Derecho Penal". Parte Especial II. Ediciones Jurídicas. Lima.
- REÁTEGUI SÁNCHEZ, James (2006) En busca de la Prisión Preventiva. Editores Jurista Lima.
- SAN MARTÍN CASTRO, César (1999) Derecho Procesal Penal. Volumen I. Editorial Grijley. 1ra reimpresión Julio Lima, Perú.
- SAN MARTÍN CASTRO, César (1998) Ministerio Público y reforma de la justicia: algunos planteamientos de principio. Revista Academia de la Magistratura Lima No 1. Perú.
- TAMATIT SUMALLA, Joseph Ma (2006) Victimología, Justicia Penal y Justicia Reparadora. Editorial de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Bogotá Colombia.
- VÁSQUEZ GONZALES, Magaly (2007) "Derecho Procesal Penal Venezolano". Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.



ANEXOS



ANEXO N° 01

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Lugar:..... Fecha:.....

Carpeta:.....

Fiscalía:.....

DELITOS	Si	No
1. Hurto		
2. Robo		
3. Abigeato		
4. Apropiación ilícita		
5. Receptación		
6. Estafa		
7. Extorción		
8. Daños		



FICHA DOCUMENTAL

NOMBRE DE AUTOR:

INDICADOR:

TÍTULO:

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

FECHA:

COMENTARIO o CITA:

LOCALIZACION: